

ÍNDICE

Educación prohíbe a institutos y colegios madrileños el uso de plataformas educativas gratuitas. EL PAÍS	Pág 2
Educación eliminará el requisito del máster para dar clases durante la pandemia. EUROPA PRESS	Pág 3
Las universidades se oponen a que docentes sin master den clases. LA VANGUARDIA	Pág 4
Colegios privados piden a las familias «minimizar» los contactos sociales fuera del aula para evitar brotes. ABC	Pág 5
Madrid deja de hacer pruebas de covid a los alumnos asintomáticos en cuarentena. EL PAÍS	Pág 6
Sindicatos denuncian que no se cumplen las ratios de 20 alumnos por aula y piden un aumento de inversión en Educación. EUROPA PRESS	Pág 7
Una línea telefónica colapsada con tres técnicos de Salud Pública para todos los colegios con contagios de Madrid. EL DIARIO.es	Pág 8
Los profesores denuncian graves carencias en el estreno escolar. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 10
El Congreso insta al Gobierno a aprobar un Plan de Digitalización para reducir la brecha digital en la educación. EUROPA PRESS	Pág 11
Los profesores españoles, entre los que menos incentivos reciben para integrar la tecnología en sus clases. EL PAÍS	Pág 12
El Gobierno aprueba el Real Decreto Ley para que se puedan contratar docentes sin el máster habilitante. EUROPA PRESS	Pág 13
El Gobierno permite de nuevo a las comunidades flexibilizar los criterios de evaluación para que los alumnos puedan pasar de curso por la pandemia. ES PAÍS	Pág 14
Los directores de instituto de Madrid denuncian que cada centro tiene cuatro profesores de baja por COVID a diario que no se cubren. EL DIARIO.es	Pag 16
Los sindicatos, divididos por la norma que permite a alumnos pasar de curso sin límite de suspensos: "Genera confusión". EUROPA PRESS	Pág 17
Cada euro que un país invierte en educación revierte en 20 de beneficio. LA VANGUARDIA	Pág 18
El desastre de los institutos madrileños: sin medios, sin sustituciones, sin protocolo eficaz . EL PAÍS	Pág 22
La enseñanza personalizada será el futuro de la educación. THE CONVERSATION	Pág 23
Entrevista a Pedro Uruñuela, nuevo Consejero de Educación de La Rioja. MAGISTERIO	Pág 25
El título de la ESO o Bachillerato no estará supeditado este curso a tener materias suspensas. MAGISTERIO	Pág 26
Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 27
Poner en valor la labor de los docentes. ESCUELA	Pág 29
El Gobierno notifica un 5% de colegios afectados por el coronavirus. ESCUELA	Pág 29
El Gobierno elimina el requisito del Máster de Secundaria y rebaja la exigencia académica excepcionalmente. ESCUELA	Pág 32
La pandemia provoca el auge de los barracones, las aulas prefabricadas. ESCUELA	Pág 34
¿Congelará el Gobierno el salario de los docentes en 2021?. ESCUELA	Pág 36

Educación prohíbe a institutos y colegios madrileños el uso de plataformas educativas gratuitas

El Gobierno regional alega un problema de protección de datos mientras los directores advierten de que, sin ellas, no podrán impartir las clases on line a los casi 350.000 alumnos en semipresencialidad

VICTORIA TORRES BENAYAS. MADRID - 25 SEP 2020

Tras el cierre de las aulas en marzo a causa de la pandemia, cientos de centros de enseñanza madrileños *plantaron* a EducaMadrid, la plataforma online del Gobierno regional, por sus carencias y sus fallos de conexión y se pasaron a las que ofrecen gratis los gigantes del sector, principalmente Google, pero también Microsoft y Apple. Su principal atractivo es su facilidad de uso y su variedad de herramientas, pero hay un escollo: los datos de los alumnos. Ahora, con el curso ya en marcha y cuatro niveles semipresenciales en los institutos y toda la FP, el Gobierno de Madrid las ha prohibido e insta a los centros a volver a EducaMadrid, que asegura haber mejorado, pero los directores de instituto replican que sigue teniendo carencias. “Sin las plataformas gratuitas, no podemos garantizar el derecho a la educación” de 350.000 jóvenes, advierte Esteban Álvarez, presidente de la Asociación Directores de Instituto de Madrid (Adimad), que solo pide una cosa a la administración: “Que nos dejen trabajar”.

“Todo surgió a raíz de la queja de un padre al recibir el consentimiento informado de un instituto” de la capital para permitir que su hijo usara Google Suite, explica Álvarez, lo que obligó al centro “a consultar a la Comunidad si había algún problema”. Educación respondió que sí lo hay, y no menor: en un escrito del día 16, el director general de secundaria y FP afirma que el centro está “incumpliendo la normativa sobre protección de datos” porque “no está legitimado para suscribir un contrato de encargo de tratamiento en su propio nombre con el prestador del servicio”, “está suscribiendo un contrato de adhesión que no ha sido supervisado por la consejería” y “de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio, los centros deben abstenerse de utilizar cualquier aplicación o plataforma cuyo prestador del servicio tenga su sede social en EE UU hasta que se garantice el nivel de protección adecuado de la transferencia internacional de datos personales”.

Tal y como se temían los directores, que se preguntan dónde están las 6.100 cámaras y los 70.000 dispositivos prometidos para la enseñanza online, esta resolución afecta “a todos los centros públicos y concertados”, a los que “se prohíbe usar cualquier plataforma que no sea EducaMadrid”, aclara un portavoz de Educación. Dicho portavoz explica que se trata “de un problema técnico y jurídico” y que la consejería “está trabajando para cerrar en breve convenios de colaboración con Microsoft, Google y Adobe para adecuar sus políticas a la normativa, pudiendo así ofrecer estas plataformas de manera complementaria a las institucionales”. Paralelamente, el Gobierno regional firmó el 14 de abril un acuerdo con el Grupo Planeta para ofrecer los recursos y herramientas digitales de aulaPlaneta a los centros públicos y concertados. “No tuvo ningún coste para la Comunidad”, asegura el portavoz.

La prohibición ha caído como una bomba entre los docentes, que llevan desde marzo usándolas y que ya habían preparado su programación con ellas para 3º y 4º de la ESO (más de 135.000 alumnos), Bachillerato (más de 108.000) y FP (más de 105.000). Han abierto una recogida de firmas a través de Change.org en la que llevan ya casi 2.900 para pedir a la consejería que recapacite, ya que los estudiantes empezaron el curso el 9 de septiembre y tienen que recibir online entre dos tercios y la mitad del horario semanal. “No se pueda cambiar toda la programación de un día para otro”, se desespera Álvarez, que rechaza los argumentos de la Comunidad. Según Adimad, usar estas herramientas “no supone cesión de datos” porque “lo único que saben las empresas de los alumnos es un alias, un número o unas iniciales”. También recuerda a la consejería que si los centros no pueden suscribir un contrato de encargo de tratamiento no podrían tampoco “contratar una empresa de soporte informático para que arregle las impresoras”.

Por su parte, fuentes de Google afirman que la resolución “contiene alegaciones que no son ciertas”. Su plataforma cuenta con la certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, los usuarios de Google Suite “no ven anuncios” y “son los propietarios de sus datos, no Google”, tampoco los venden a terceros y no comparten “información personal almacenada” en sus sistemas. En cuanto a la sentencia, según aclara la propia Agencia Española de Protección de Datos, el tribunal avaló el uso de las cláusulas contractuales tipo, que Google usa desde 2012, lo que a su juicio le permite seguir operando en la UE. La empresa confirma que está “trabajando con la Comunidad en un acuerdo”. Dicho convenio ha sido ya “revisado por Google” y solo queda que lo haga el Gobierno regional. En cualquier caso, su firma “responde a una formalidad y no afecta a las garantías” que ofrecen. “Estamos abiertos a colaborar con la consejería”, concluye la tecnológica, que afirma dar gratis sus servicios por su compromiso “con una educación accesible”. De cobrarlos, estiman su coste en 10,40 euros por usuario al mes, 124,8 al año. Gobiernos de comunidades como Murcia, Cataluña, Navarra, Extremadura, Baleares y País Vasco usan la plataforma, así como universidades madrileñas como la Carlos III.

Pero el nudo gordiano es que EducaMadrid “no funciona, se sigue cayendo constantemente” y sus funcionalidades son insuficientes, se lamenta el presidente de Adimad, que afirma que su principal defecto es

que "no permite la videollamada", con lo que no se pueden dar clases on-line. "EducaMadrid funciona como una escopetilla de plomos y no está preparada para el volumen de conexiones que debería soportar", corrobora Teresa Jurdado, de UGT Madrid. Educación asegura que ha rediseñado la página, le ha añadido aplicaciones y ha comprado "nuevos servidores, sistemas de almacenamiento de datos y electrónica de red". "Próximamente, se integrará el servicio de videoconferencia", promete.

Isabel Galvín, de CC OO Madrid considera injustificable que la consejería "haya cerrado un contrato de exclusividad con una sola empresa" y pide "transparencia" y que se amplíe a distintas plataformas, "ya que han ido incapaces de que la plataforma pública sea suficiente, capaz y útil". Galvín añade que, al margen de la guerra de las plataformas, el verdadero problema de la teledocencia es que "los centros carecen de la conectabilidad necesaria para poder llevarla a cabo".

Óscar Martín Centeno, del Consejo de Directores de Colegios, apunta a que las plataformas gratuitas podrían seguirse usando siempre que sea "sin aportar datos personales de ningún tipo", es decir, siempre que los niños sean el alumno 23 y no Fulanito Pérez con un 6 en Mates y alérgico al plátano. En todo caso, "la única plataforma que se puede usar con total seguridad es EducaMadrid y, de momento, está funcionando bastante bien", asegura. Los colegios, no obstante, tienen el 100% de sus clases presenciales. Mientras se resuelve el lío en los despachos, muchos centros están haciendo caso omiso de la orden y siguen mandando a los padres el usuario y la clave para entrar, por ejemplo, en Google Classroom.

europapress.es

Educación eliminará el requisito del máster para dar clases durante la pandemia

MADRID, 25 SEPT. (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Educación eliminará "excepcionalmente" por la pandemia el requisito de realizar el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia, ante las dificultades de muchas comunidades autónomas para encontrar profesores sustitutos y cubrir las contrataciones previstas para este curso.

"Muchas comunidades autónomas han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado para cubrir las contrataciones previstas, máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas para ingreso de funcionarios docentes. A algunas CCAA se les ha acabado la lista de sustituciones", ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, este jueves en rueda de prensa.

Así lo ha anunciado tras la reunión de la séptima conferencia sectorial de Educación y la segunda interministerial con Sanidad desde el inicio de la pandemia, durante la cual la ministra Isabel Celaá, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de todas las comunidades autónomas han analizado el comienzo del curso escolar.

Así, el Ministerio ha decidido "flexibilizar" los requisitos para el ejercicio de la docencia "de manera excepcional y limitada hasta que concluya el curso académico de la pandemia". En concreto, ha precisado que se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no hayan cursado el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas, pero cumplan todos los demás requisitos, siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo. "Se garantiza así que se puedan incorporar de manera urgente a las plantillas docentes", ha subrayado Celaá, en relación a esta contratación excepcional de profesorado de refuerzo. Entre otras medidas acordadas, también han decidido adaptar las pruebas de acceso a la Universidad, para asegurar "el mayor grado de certeza" a los alumnos y profesores de segundo de bachillerato, de forma que estos exámenes seguirán un modelo similar al del curso pasado adaptados a las circunstancias de la pandemia.

Esta adaptación se aplicará también a las prácticas de Formación Profesional con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT) al mínimo establecido en la ley (220 horas), la integración del módulo de FCT en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo en el caso del Grado Medio y la FP Básica.

Igualmente, el Ministerio de Educación estudiará cambios normativos que permitan adaptar el currículo y las programaciones didácticas para recuperar los "aprendizajes imprescindibles" que no pudieron alcanzarse el curso pasado, ante la "dificultad" manifestada por muchas CCAA y centros a la hora de hacerlo por la "rigidez del modelo de currículo". La ministra ha reiterado la obligatoriedad de asegurar la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones, tanto a los alumnos que acuden de manera presencial a los centros como a aquellos que reciben clases a distancia y a los que se encuentran en cuarentena, por dar positivo en Covid19 o

por ser contacto estrecho. "No podemos permitir que ningún estudiante desatienda su proceso de formación", ha enfatizado.

Preguntada por las quejas de familias que dicen que no se está garantizando de manera adecuada la formación online en caso de cuarentenas, la ministra de Educación ha asegurado que en "muchísimas CCAA" ya se está dando este servicio online y ha precisado que en aquellas donde no es así, el problema tiene que estar "resuelto en 15 días".

PRÉSTAMOS DE TABLET U ORDENADOR

Además, Celaá ha puesto de relieve que al producirse los confinamientos por grupos burbuja, que suelen ser de unos 20 alumnos, es fácil garantizar que todos cuenten con las herramientas digitales para seguir las clases y, en caso de que algún estudiante no disponga de ellas, se le hará "un préstamo".

En esta línea, ha informado de que, en el marco del programa Educa en Digital, prevén disponer de medio millón de dispositivos electrónicos en torno a Navidad. Por otro lado, Celaá también ha garantizado que se ofrecerá un apoyo especial al alumnado más vulnerable, con dificultades de aprendizaje o emocionales. Respecto al absentismo, ha comunicado que la mayoría de las CCAA han afirmado que lo veían como un problema de alguna dimensión al principio pero que finalmente se ha mostrado "de poca relevancia", siendo tres las comunidades donde se observa que "grupos minoritarios culturales sí persisten en la no asistencia a clase".

LA PANDEMIA NO EXONERA DE IR A CLASE

En este sentido, el Ministerio encargó un informe a la Abogacía del Estado, que este jueves han puesto a disposición de las CCAA en el que se concluye que "la pandemia per sé no exonera de la obligación de atender a las clases en la enseñanza obligatoria".

Durante la reunión, se ha facilitado también a las CCAA un documento con recomendaciones higiénico-sanitarias elaboradas conjuntamente con el Ministerio de Sanidad para las prácticas en enseñanzas de FP con personas ajenas a los centros educativos, especialmente Hostelería, Imagen Personal y Sanidad.

La ministra ha concluido que el objetivo común que se habían propuesto, el de abrir la escuela, "se ha cumplido" aunque "no ha sido fácil" y ha destacado que en el 95,5% de los centros educativos no se ha producido "ninguna incidencia" relacionada con el Covid-19. Actualmente, hay 2.852 aulas de toda España confinadas, el 0,73% del total y la ministra ha descartado un confinamiento total como el de marzo. Desde principios de septiembre, más de 8 millones de estudiantes no universitarios y más de 700.000 docentes han regresado a las aulas en más de 30.000 centros educativos. "Este inicio de curso es una demostración de que las medidas que acordamos y en las que llevamos trabajando estos meses están funcionando", ha señalado Celaá, quien ha reconocido el gran esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los docentes.

CRÍTICAS A LA LOMLOE

Preguntada por las críticas que está recibiendo el Gobierno por tramitar durante la nueva ley de educación, la LOMLOE, y en concreto por las críticas según las cuales, la ley nacerá obsoleta, la ministra ha dicho que no está "en absoluto de acuerdo" pues "si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de activar transformaciones urgentes en el sistema educativo". "La educación, la digitalización, la incentivación del profesorado o el índice de abandono escolar no pueden esperar más. Bienvenido sea el proyecto y toda la tramitación y todo el debate que se abre ahora con extensísima participación", ha zanjado.

LA VANGUARDIA

Las universidades se oponen a que docentes sin master den clases

Los sindicatos exigen que sea excepcional esta solución para paliar la falta de sustitutos en las escuelas

Carina Farreras. Barcelona 25/09/2020

Las universidades creen que ya hay profesionales suficientes para sustituir a los docentes de baja debido a la pandemia y que medidas como la acordada el jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para contratar profesionales sin el requisito del master de secundaria, devalúan la profesión. Por su parte, los sindicatos aceptan la resolución siempre que sea excepcional para este curso y una "solución de urgencia".

Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas habían expresado al ministerio la necesidad de engordar la bolsa de sustitutos ante las bajas laborales de los docentes en las escuelas. Unas bajas debidas a la sustitución de profesores con patologías y por tanto vulnerables a la Covid-19, y, otras, a las bajas por enfermedad o confinamiento.

Algunas comunidades, como Catalunya, han comunicado que, de momento, cuentan con una bolsa de interinos suficiente y no harán uso de profesionales sin titulación del master de secundaria para impartir clases. La realización de este master, que sustituyó en su día al Certificado de Aptitud Pedagógica, es la única vía para acceder a la profesión y ejercer de profesor de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional, tanto en centros públicos como privados.

Galicia también ha declarado que utilizará este recurso sólo si lo necesita, pero ya está preparando un curso exprés que garantice una mínima preparación a los futuros profesores de urgencia. El Centro Autonómico de Formación e Innovación gallega está diseñando una formación de corta duración para capacitar pedagógicamente a nuevos docentes.

La Conferencia de Rectores (CRUE) apoya a la Conferencia de Decanos de Educación que han protestado por lo que consideran una devaluación de la titulación. En sendos comunicados, manifiestan su rechazo a la decisión de eliminar el requisito del máster en la contratación de profesorado para reforzar las plantillas. Los rectores creen que esa medida, de carácter “excepcional y temporal”, sería necesaria “si no fuese posible encontrar funcionarios interinos docentes en posesión del máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en la ESO”.

La Crue argumenta que desde la implantación del requisito del máster se han titulado más de 200.000 profesores de secundaria y que “ninguna iniciativa que suponga una merma en la calidad de la Educación debe ser aplicada si realmente existe otra alternativa”.

Los rectores se han ofrecido para “revisar esa decisión y consensuar otro tipo de medidas que permitan agilizar la contratación de profesorado en estos momentos tan complicados para todos”.

Por su lado, la Conferencia Nacional de Decanos de Educación ha expresado un profundo “rechazo y perplejidad” ante la medida que supone “una agresión directa a la profesión docente, a los cientos de miles de titulados y estudiantes del máster y a las universidades”.

En el comunicado, consideran que “la falta de previsión o incapacidad de contratación y gestión de las listas de sustitución de las comunidades autónomas no puede resolverse con medidas que devalúen la profesión docente y ponen en riesgo el derecho fundamental a recibir una educación segura y de calidad”, concluyen.

Por su parte, los sindicatos educativos critican la falta de previsión de las administraciones. Y explican que las bolsas de interinos se están agotando debido, entre otros aspectos, a las “malísimas ofertas de trabajo”. Además exigen que sea una medida excepcional, acotada a la pandemia.

Para CC.OO., la necesidad de profesores es una “expresión de un problema de fondo” que recalca en que la profesión docente “no es considerada como una profesión atractiva”. Por ello, invita a abrir un debate para lograr que “goce de consideración social y de unas condiciones dignas”.



Colegios privados piden a las familias «minimizar» los contactos sociales fuera del aula para evitar brotes

Ep. Madrid 26/09/2020

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha reivindicado las aulas como «lugares seguros» frente al coronavirus, aunque ha pedido a las familias «minimizar» los contactos sociales fuera del colegio para evitar brotes.

En este sentido, la asociación insiste en que los contagios que se encuentran en los centros educativos, hasta el momento, «son importados» y por tanto los colegios son «lugares muy seguros para los niños».

«Todos debemos apostar y priorizar la educación frente a otras actividades, nuestros alumnos necesitan ir al colegio tanto por su formación académica, como por su salud emocional y social. El colegio es ya un espacio de socialización, adaptémonos a esta situación y extrememos precauciones y minimicemos los contactos sociales fuera del colegio, será la única forma de que no surjan brotes en la escuela», ha pedido la directora general de CICAE, Elena Cid.

Para cumplir con las directrices exigidas, en los colegios se está llevando a cabo una enseñanza híbrida. Elena Cid reconoce que los profesores están realizando una labor «admirable» para poder garantizar el aprendizaje de los alumnos que tienen en el aula, de los estudiantes que la están siguiendo por streaming en otros espacios habilitados dentro del colegio y de los alumnos que permanecen en sus casas porque están en cuarentena.

La asociación ha agradecido el esfuerzo «ímprobo» que están realizando los docentes en este comienzo de curso y reclama para ellos la consideración de «trabajadores esenciales», pues «a pesar de tener una PCR negativa y encontrarse perfectamente, les están obligando a realizar largas cuarentenas preventivas».

Madrid deja de hacer pruebas de covid a los alumnos asintomáticos en cuarentena

La Consejería de Sanidad cambia el protocolo, que hasta ahora establecía la obligatoriedad de PCR para todo estudiante que hubiera estado en contacto estrecho con un positivo

VICTORIA TORRES BENAYAS. MADRID 26 SEP 2020

Apenas 16 días de vuelta al cole ha durado la promesa de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que se haría una prueba diagnóstica a todos los compañeros de clase de un niño contagiado de covid. Entre críticas por la demora de Salud Pública en responder a los centros, con los colegios como el principal foco de brotes de la región y con 13.856 alumnos aislados según el último balance, el Gobierno regional ha cambiado el protocolo covid de los centros educativos: a partir de ahora, cuando un alumno dé positivo, a los niños de su clase que sean asintomáticos no se les realizará prueba alguna, solo a los que presenten síntomas. Eso sí, todos ellos deberán seguir haciendo, como hasta ahora, la cuarentena, que se ha reducido de 14 a 10 días tras el acuerdo del pasado martes entre el Gobierno y las autonomías.

Sanidad ha llevado a cabo este cambio sustancial en el manejo de los contagios en las escuelas un sábado y sin informar de él públicamente. Sobre las diez de la mañana, ha procedido a sustituir en la red el protocolo anterior por el nuevo. El nuevo documento tiene fecha del día anterior, el 25. Tras adelantar Telemadrid la noticia, un portavoz de Sanidad ha explicado a este diario que "la Comunidad no se inventa nada, lo que hace simplemente es adecuar su protocolo" a la nueva *Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos* del Ministerio de Sanidad del día 24.

Lo que establece este documento para los contactos estrechos en los centros educativos, es decir, para los miembros de un grupo estable de convivencia, es que "si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA —pruebas diagnósticas de infección activa, que puede ser una PCR o un test rápido de antígenos— a los 10 días de la última exposición a un caso confirmado". En la anterior versión, del 10 de septiembre, decía prácticamente lo mismo: "Se recomienda la realización de PCR a los contactos estrechos".

Esta recomendación del ministerio, que no ha cambiado, se traduce ahora en el documento de la consejería en una no realización. Lo que sí ha cambiado es cómo está Madrid. "En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica salvo que desarrollen síntomas", indica la nueva versión del protocolo de la Comunidad. Antes, decía: "Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos positivos". ¿Tan mal está Madrid que tiene que renunciar a la detección precoz? Sanidad "no hace valoraciones de documentos técnicos".

Para Isabel Galván, responsable de Educación de CC OO, es "un escándalo" y una "actuación temeraria". "Como son incapaces de cumplir la promesa de PCR para todos los alumnos y son incapaces de cumplir su protocolo, lo cambian. No estaban haciendo rastreos de los positivos y ahora tampoco harán diagnósticos, están renunciando a localizar a los asintomáticos, lo que supone un enorme riesgo para la salud pública", sostiene, al tiempo que denuncia que los centros "se están enterando del nuevo protocolo por los medios". Según Sanidad, a lo largo del fin de semana se irá comunicando el cambio a los directores de colegios e institutos "para que lo tengan para el lunes" aunque, según certifica Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos, aún no les ha llegado.

"Están dejando a 1.200.000 alumnos y a 100.000 trabajadores del personal docente y no docente, y a sus familias y a sus abuelos, fuera de los protocolos generales, que establecen PCR a los contactos de un positivo", denuncia Galván. Al respecto, Sanidad alega que en la *Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de covid-19* del ministerio "explícitamente indica que, ante una alta demanda de realización de pruebas, se dará prioridad a los sintomáticos". "En este contexto, la principal medida de prevención es la cuarentena, con vigilancia de síntomas. Ante su aparición, se realiza la prueba", sostiene la consejería, que subraya además que hacerlo así "no da lugar a equívocos ni a incumplimientos de cuarentena cuando se tiene una PCR negativa, como está ocurriendo en estos momentos y no solo en Madrid".

En realidad, este nuevo protocolo lleva al menos una semana aplicándose por indicación de Salud Pública a los centros de salud, asegura el pediatra del Servicio Madrileño de Salud Ángel Carrasco, hasta hace un mes presidente de la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria. Carrasco considera el cambio "significativo, pero dentro de lo previsto y aceptable teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual". El doctor explica que la derivación de los casos en los colegios e institutos por parte de Salud Pública "estaba sobrecargando" a los ambulatorios y que la medida más importante para frenar el virus es "el aislamiento". "Dé positivo o negativo, el niño tiene que estar en cuarentena", recuerda, para añadir que "los menores que se contagian tienen síntomas leves y, aunque no se han hecho estudios amplios, parece que no son grandes transmisores". ¿Pero qué pasa con los padres, que hacen vida normal sin saber si sus hijos están contagiados o no y que pueden estar expandiendo el virus? "El riesgo existe, pero es menor", contesta el pediatra.

“Fui al centro de salud, les conté lo que había pasado y me preguntaron si tenía síntomas. Como no los tiene, me contestaron que al niño no se le hace la prueba y papá y mamá os podéis ir tranquilamente a trabajar”, cuenta Nuria Martín, de Pinto, que el viernes tuvo que recoger a su hijo de seis años del colegio después de que le diagnosticaran la enfermedad a un compañero, que estuvo una semana esperando el resultado. Ella tiene “apaño”, haciendo turnos con su marido, pero se pregunta qué pasará con los padres que no puedan quedarse en casa a cuidar de sus hijos, ya que “sin PCR quién te va a dar la baja”.

El jueves, la pediatra de las gemelas de Íñigo Domínguez le dijo lo mismo en Madrid capital tras el positivo de la maestra de sus hijas. “Si me hubieras llamado ayer, os habríamos hecho PCR a todos, pero ha cambiado el protocolo. Estábamos haciendo muchísimas pruebas”, cuenta que le dijo la doctora. Ellos, por prudencia, han decidido quedarse en casa toda la familia gracias a que pueden teletrabajar y se plantean si pagar de su bolsillo un test rápido o una PCR.

PRINCIPALES NOVEDADES

- La cuarentena es de 10 días en vez de 14.
- Los compañeros de la clase burbuja del niño positivo por covid no se harán PCR, ni tendrán que ir al médico salvo que tengan síntomas compatibles.
- El grupo estable de convivencia vuelve al cole pasados los 10 días de cuarentena, sin necesidad de informes médicos ni PCR. Al alumno que dio positivo también se reincorpora a clase sin volver tener que hacerse una PCR.
- Los niños que acrediten haber pasado covid los últimos tres meses no tendrían que hacer cuarentena.

europapress.es

Sindicatos denuncian que no se cumplen las ratios de 20 alumnos por aula y piden un aumento de inversión en Educación

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CSIF denuncian que no se están cumpliendo las ratios de 20 alumnos por clase, como así recomendaron los Ministerios de Sanidad y de Educación y FP de cara al inicio del curso escolar, y piden un aumento de la inversión en Educación.

Así se lo han trasladado ambos al Departamento que dirige Isabel Celaá en la Mesa Sectorial de Educación, que se ha celebrado este lunes y que no convocaba a los sindicatos desde el pasado mes de mayo.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha planteado a Educación la bajada de ratios, la adopción de medidas de protección del profesorado, la incorporación de personal docente y sanitario en los centros educativos, el incremento de la inversión y la regulación del teletrabajo. Pero a pesar de todas estas propuestas, CCOO denuncia que “el Ministerio ha dado la callada por respuesta, haciendo caso omiso a las demandas”.

El sindicato ha incidido en la necesidad de regular por real decreto ley la reducción de ratios a nivel estatal, estableciendo un número máximo de 20 estudiantes por aula, y de asegurar la presencia de personal sanitario en todos los centros educativos, de modo que sean enfermeros quienes desarrollen las labores de coordinación Covid en los centros educativos y colaboren en la detección y puesta en marcha de los correspondientes protocolos en caso de necesidad.

Asimismo, ha insistido en que los fondos asignados a las comunidades sean de carácter finalista y se destinen en su totalidad a la reducción de ratios, la habilitación de espacios en los centros educativos y aquellos aspectos relevantes para afrontar la crisis sanitaria en los centros educativos. Del mismo modo, considera imprescindible reforzar los servicios de prevención y reasignar al profesorado de educación el nivel dos de riesgo.

En este sentido, CCOO ha recordado al Ministerio que, a día de hoy, para reducir las ratios a 20 estudiantes por aula, todavía se requiere la contratación de 39.894 docentes.

Finalmente, el sindicato ha pedido la regulación negociada del teletrabajo docente. Regulación que requiere, según CCOO, garantizar las condiciones laborales del profesorado, la calidad educativa y el derecho a la conciliación laboral y personal de los trabajadores del ámbito educativo, evitando las “jornadas maratónicas”, así como estableciendo los medios materiales, informáticos y de conectividad necesarios para el ejercicio de esta teledocencia.

Por su parte, CSIF ha reclamado a la ministra este lunes que impulse una reforma educativa para incrementar el gasto educativo en 3.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 15.000 millones en el conjunto del Estado (el 6% del PIB).

Durante la reunión, el sindicato ha hecho balance de la situación tras la 'vuelta al cole': los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan por encima de los 20 alumnos por clase; el refuerzo de personal interino es insuficiente; y los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista.

CSIF también ha reiterado sus críticas a la decisión de contratar docentes sin máster, situación a la que se ha llegado, según el sindicato, por "una mala planificación y por la precariedad en las plazas de interinidad ofertadas". En este sentido, plantea que las comunidades autónomas compartan bolsas de trabajo para que interinos que cumplan los requisitos puedan trabajar en cualquier lugar de España.

Igualmente, CSIF exige al Ministerio que considere al profesorado como personal de riesgo por su exposición al virus, así como una atención especial a los docentes vulnerables y una evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo. Todas estas circunstancias reafirman la necesidad, según el sindicato, de negociar un Estatuto Docente que regule la profesión docente en su totalidad para garantizar las condiciones socio-laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas



Una línea telefónica colapsada con tres técnicos de Salud Pública para todos los colegios con contagios de Madrid

La Comunidad de Madrid cambia el protocolo para dejar de hacer PCR a los compañeros de clase de un positivo (contactos estrechos) si no tienen síntomas tras constatar que las aulas confinadas se han multiplicado por cinco en una semana

Sofía Pérez Mendoza / Mónica Zas Marcos. 28 de septiembre de 2020

En la última semana, 93 aulas madrileñas han sido enviadas cada día a guardar cuarentena por registrar casos positivos de coronavirus. Es una media realizada con los datos actualizados por la Comunidad de Madrid el pasado miércoles: el número de clases confinadas ha aumentado de 178 a 832 en siete días y ya son más de 13.800 los alumnos afectados (el 1,1% del total).

Detrás de las cifras, hay decenas de docentes que están actuando como médicos sin serlo. El teléfono habilitado por la Consejería de Sanidad para asesorar a los 4.056 centros educativos de la Comunidad de Madrid comunica a todas horas. El equipo de técnicos en Salud Pública que responde al otro lado de la línea está formado por tres personas que no dan abasto: dos en turno de mañana y otro en el turno de tarde, según datos de Comisiones Obreras, además de algunos administrativos encargados de la burocracia. El departamento no facilita cifras del personal a cargo. "Las peticiones las reciben y tramitan personal administrativo, y las decisiones de actuación las realizan los técnicos", responde un portavoz de la Consejería de Sanidad a elDiario.es.

Tres semanas después del inicio de curso, la promesa de la Comunidad de Madrid de hacer test "el mismo día" a todos los niños de una clase si se confirma un positivo, como aseguró Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en 20 minutos, se ha quedado en papel mojado. El Gobierno autonómico acaba de modificar el protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en las aulas para dejar de hacer PCR a los contactos estrechos si no tienen síntomas. Es decir, a los compañeros de un positivo. "No se indica salvo que se desarrollen síntomas", dice la última actualización, del 25 de septiembre. La primera guía, de finales de agosto, establecía que era recomendable realizar pruebas diagnósticas a los niños y niñas que hubieran convivido de forma estrecha en la misma clase con el contagiado.

Para la detección y comunicación a tiempo de los contagios en centros escolares, el Ministerio de Educación diseñó la figura obligatoria del coordinador COVID-19. Una medida "precipitada" para los sindicatos y que, en su opinión, cargaba toda la responsabilidad en los centros ante una vuelta al cole "caótica". En Madrid, cuando no hay un enfermero o enfermera en la plantilla escolar, la labor recae sobre "un miembro del equipo directivo". Ese es el caso de Elena, jefa de estudios del IES Juan de Mairena y, desde hace una semana, también responsable del "área coronavirus". "Es una locura, no soy sanitaria, soy profesora de francés", cuenta a elDiario.es. En menos de una semana, su instituto ha registrado tres positivos. La Comunidad de Madrid solo ha contratado a tres de los 150 profesionales de enfermería que prometió incorporar a los centros educativos.

El protocolo de la Comunidad de Madrid establece que el coordinador COVID-19 debe ponerse en contacto con "el área correspondiente de Salud Pública" cuando se registra un caso confirmado en el centro. Una directriz que hace aguas fuera del papel y choca con una plantilla exigua de técnicos que no puede asumir todas las consultas.

Las llamadas se ponen a la cola. Tres, cuatro, cinco y hasta quince días pasan sin poder contactar con un interlocutor experto, explican a elDiario.es varios coordinadores COVID de escuelas infantiles, colegios e institutos madrileños. La alarma de las familias y el miedo al contagio lleva a los equipos directivos a decretar cuarentenas por su cuenta y riesgo y que no siempre están avaladas por un epidemiólogo.

En una escuela infantil de Getafe, la directora lleva diez tratando de contactar con Salud Pública tras confirmarse un positivo en una clase de un año, donde los niños y niñas van sin mascarilla. La escuela tuvo confirmación del contagio el fin de semana del 12 de septiembre y avisó a las familias de ese aula para que no acudieran el siguiente lunes.

“Esperamos haber hecho lo correcto. No somos médicas. Nos sentimos abandonadas”, dice una maestra que está ayudando a la dirección con el ingente volumen de gestiones que lleva consigo cada contagio. A eso se suman las llamadas de los padres y madres preocupados y, muchas veces, desorientados sobre qué tienen que hacer. “Nos llaman para preguntarnos si el niño tiene que hacerse PCR y les derivamos al centro de salud. Se supone que les tendrían que llamar y no al revés, ¿no?”, se pregunta. Con el nuevo protocolo, que empezará a aplicarse este lunes, se descartan directamente las pruebas para los contactos estrechos.

Los docentes se manejan con una guía entregada al inicio de curso que obliga a cerrar el aula afectada por el caso positivo y a mandar a todos los alumnos a casa para hacer una cuarentena preventiva de 14 días si se trata de un grupo de convivencia estable, o grupo burbuja. Pero si el contacto no pertenece a una burbuja o sus contactos son dudosos, la cosa se complica.

“En el protocolo no está claro que se mande a casa a todos con un positivo. Sino que se estudia cada caso. Cada caso es diferente y es el sanitario quien tiene que valorarlo, pero no se hace”, replica Isabel Rico, directora de la Escuela infantil Los Títeres, en Pan Bendito. Su primer caso positivo fue en una clase de bebés. “Nos dijeron que valoráramos nosotras si había sido contacto estrecho o no. Les explicamos que las dos niñas habían estado sentadas juntas pero sin tocarse. ¿Cómo voy a valorar yo si eso es un contacto o no? Si les llamo para eso”, relata la maestra, que está asumiendo desde hace unos días también la labor de coordinadora COVID porque la compañera que ejercía como tal ha dimitido.

El pasado lunes tuvo otro positivo en un aula de cuatro años. Ya van dos. La decisión de mandar a todos a casa la ha tomado, esta vez, de manera unilateral porque nadie ha respondido al otro lado del teléfono. “Unas compañeras me avisaron de que a las ocho de la mañana lo cogían. Pero me salta un contestador que te informa del protocolo general y te dice que en caso de dudas, esperes”, describe Rico. Lograr contactar o no depende de la suerte. A veces los docentes lo consiguen en el primer día. Otras, no.

En la calle Martín de Porres, donde se ubica el operativo para atender a los colegios, el teléfono no deja de sonar. “El número de técnicos es insuficiente. No lo cogen porque no pueden”, denuncia Comisiones Obreras, que asegura que los tres técnicos son los encargados de la interlocución directa con los coordinadores COVID que llaman. “Evalúan y les explican cómo tienen que proceder”, explica el sindicato. Además de esta línea, la Comunidad de Madrid ha habilitado un teléfono 900 para las familias que atienden las Unidades Técnicas de Salud Pública distribuidas por áreas territoriales.

Una vez confirmado un contagio, Salud Pública recibe un anexo pormenorizado enviado por los centros con el nombre y el teléfono de cada uno de los contactos. Así lo establece el protocolo. Sin embargo, la mayoría de las familias terminan poniéndose en contacto por iniciativa propia con su centro de salud para pedir una PCR a su pediatra. La guía de actuación hasta ahora recomendaba hacer PCR “a los contactos estrechos cuando proceda”. En los centros se daban, en la práctica, situaciones desiguales. Y algunas clases -a las que sí prescribían prueba- terminaban el periodo de cuarentena sin tener los resultados de todos los alumnos. Los retrasos registrados en laboratorios puntuales de la región complican aún más la gestión en los colegios.

En los institutos, las dudas se multiplican porque, con las optativas, los grupos no se consideran estables. Y el uso de mascarillas dificulta, en la práctica, que los contactos se tomen como estrechos. “La primera vez me preguntaron la edad de los chavales y si guardaban la distancia y llevaban mascarilla. Les dije que sí y decidieron que la clase no se confinaría porque no se consideraban contactos estrechos”, cuenta Elena, coordinadora COVID y jefa de estudios del IES Mairena. Su equipo directivo está lidiando estos días con la incompreensión de buena parte de las familias, que muchas veces tienen dudas o no entienden las decisiones.

Una sensación parecida a la de los propios docentes, que apenas han recibido formación para dedicarse a un asunto sanitario sin precedentes y con la suficiente gravedad como para seguir improvisando. Aunque la Comunidad de Madrid prometió instruir a los coordinadores COVID-19, lo único que recibieron fue un curso por Zoom de dos horas, una para los conceptos generales y otra dedicada a resolver las dudas a través de videollamadas. “La charla versó sobre menores cuando la mayoría de los docentes convocados trabajábamos con mayores de edad”, cuenta el director de un centro para adultos a quien la reunión le resultó, dice, “inútil” para aclarar las dudas. “Envié siete preguntas y me respondieron una. A una compañera, ninguna”, señala.

“Nos vamos aclarando por radio patio, consultando en los grupos de Whatsapp o en Twitter. El mayor problema es la desinformación. Nos intentamos ayudar unos a otros porque nadie responde”, se lamenta este profesional. Tras las quejas de los docentes, la Comunidad ha puesto a disposición de los coordinadores COVID una formación “complementaria” de diez horas a finales de septiembre, cuando casi un millar de clases ya han sido confinadas.

La única explicación oficial, a casi tres semanas del inicio de curso, es que “es normal que cuando se empieza a hacer una actividad pueda haber una situación mejorable”. La directora general de Salud Pública, Elena

Andradas admitió en rueda de prensa junto al viceconsejero que alguna vez "se ha podido no atender de manera inmediata", pero aseguró que habían "incrementado el número de profesionales". Una afirmación que contrasta con la realidad del despacho de Salud Pública dedicado a Educación, en el que todas las líneas están saturadas, pero solo hay tres sillas ocupadas.

elPeriódico de Catalunya

Los profesores denuncian graves carencias en el estreno escolar

Una encuesta de CCOO revela que no hay manera de mantener la distancia y que la ratio está disparada

El 27% de los docentes aseguran que su centro todavía no ha recibido las mascarillas prometidas

Carlos Márquez Daniel. BARCELONA - LUNES, 28/09/2020

Quizás para que no parezca que sus quejas carecen de realismo, CCOO decidió, durante la primera semana del curso 2020-2021, consultar a los profesores sobre sus condiciones de trabajo. Y así, con cifras y testimonios, no solo opiniones, este sindicato llega a la conclusión de que los profesionales de la docencia están realizando su trabajo en unas condiciones muy mejorables. Por ejemplo: en tres de cada cuatro aulas no se puede mantener la distancia de seguridad de metro y medio, el 40% de las clases de primaria superan la ratio de 20 alumnos y el 27% de los 1.750 encuestados asegura que a su centro no han llegado las mascarillas higiénicas prometidas.

Es habitual que los sindicatos de la enseñanza sean duros con el Departament d'Educació, con indiferencia de quién ostente esa cartera. Aunque es cierto que en tiempos de recortes, a partir del 2010, con Irene Rigau al frente, su nivel de ira tocó techo. Siguen enfurecidos porque el inconformismo forma parte de su ADN y de su estrategia, pero es menos habitual que acompañen el mensaje de la opinión directa de los interesados. CCOO llega a la conclusión de que los medios desplegados por el Govern "son claramente insuficientes para hacer frente a las circunstancias excepcionales de este curso". Por ello, reclaman, es necesario "iniciar un verdadero proceso negociador para asegurar el derecho a una educación segura para todos".

LIMPIEZA Y MENOS NIÑOS

La ausencia de diálogo con la 'conselleria' de Josep Bargalló, amén de las quejas sobre recursos y condiciones laborales, es otro de los clásicos en esta batalla entre la Generalitat y sindicatos de la educación pública. Sus demandas en tiempos de pandemia, de sobra conocidas: reducción de ratios, promoción de salidas culturales y ocio con la finalidad de esponjar los centros educativos, incrementar la limpieza y desinfección de las escuelas y protección de todo el personal con las medidas adecuadas.

Los 1.750 profesionales que han respondido la encuesta trabajan en 1.246 centros distribuidos en 284 municipios. Una muestra ciertamente representativa. A la pregunta de si han llegado las mascarillas FFP2 solicitadas por los sindicatos, un 57,7% de los profesores dicen que no. Un "dato preocupante", según CCOO, a pesar de que el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aseguró semanas atrás que este nivel de protección no es necesario en la enseñanza, y que con las quirúrgicas están ya protegidos. Otro 37,8% dicen que el gel hidroalcohólico proporcionado no es suficiente, por un 58,5% que sí lo ven bien.

Especialmente sangrante es el asunto de la distancia de seguridad, puesto que el 74,4% de los entrevistados asegura que no hay manera física de garantizar esa separación. Educació, sin embargo, siempre se ha escudado en la idea de los grupos burbuja para garantizar el buen funcionamiento y la continuidad de los centros educativos. Es decir, que no es tan importante el espacio entre estudiantes, siempre difícil de controlar, como el estancamiento de las aulas, de manera que si se produce un positivo, solo se va a casa ese grupo. Respecto a la limpieza de los baños, el sindicato denuncia que solo el 4,1% de los encuestados aseguran disponer de una desinfección constante, y el 30,9% dicen que ese repaso a fondo solo se hace una vez al día. La mayoría, un 45,6%, sostienen que los lavabos se limpian en dos ocasiones cada jornada.

LÍMITE LEGAL

La ratio es quizás uno de los puntos más inquietantes. En el momento en el que Salut ha limitado los encuentros a seis personas, en el 41% de las clases de primaria hay más de 20 alumnos, el límite legal. En infantil, el 39% también superan esa cifra, mientras que en secundaria solo el 3,42% de los grupos están por encima del límite establecido para estas edades (30). En FP y bachillerato no llegan al 1%, mientras que la formación de adultos, casi el 52% de los grupos tienen más de 24 estudiantes.

De los 1.750 entrevistados, cerca de 800 añadieron algún comentario en la encuesta. Giran en torno a las carencias de material y recursos humanos, y coinciden en el gran esfuerzo que está haciendo tanto la comunidad educativa como la dirección de las escuelas. Pasadas dos semanas, o unas cuantas más, sería interesante volver a realizar la encuesta. Por si eran los errores propios del estreno o estamos ante un fallo del sistema.

europapress.es

El Congreso insta al Gobierno a aprobar un Plan de Digitalización para reducir la brecha digital en la educación

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) - El Congreso de los Diputados ha instado este lunes al Gobierno a aprobar un Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial que aborde la reducción de la brecha digital y de aprendizaje, en colaboración con las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar el derecho de todos a la educación y la igualdad de oportunidades, asegurando la continuidad educativa a distancia del alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles.

La propuesta es resultado de una enmienda transaccional entre el PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, que habían presentado sus respectivas Propositiones No de Ley (PNL) en la Comisión de Educación del Congreso de este lunes, todas ellas relativas a la digitalización en las aulas, y ha sido aprobada con 33 votos a favor, contando únicamente con el voto en contra de ERC, PNV y Bildu.

Concretamente, dicho Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial deberá incluir: el diseño y puesta en marcha de programas de radio y de una televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas, para áreas del país sin Internet o sin televisión por cable; el impulso de propuestas y proyectos de acuerdos con las empresas de telecomunicaciones, sector tecnológico, así como entidades educativas para eliminar o reducir al máximo el coste de acceso a los recursos educativos online; y el avance en la plena interoperabilidad didáctica de los sistemas.

Asimismo, insta a trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que desarrolle programas que ofrezcan soluciones que permitan el acceso a Internet al 100% de la población; a coordinar y colaborar con las comunidades autónomas actuaciones dirigidas a establecer las condiciones necesarias para fomentar la educación digital y reducir la brecha digital y de aprendizaje en los siguientes ámbitos y con las siguientes acciones.

En relación al alumnado: fomentar la colaboración con las comunidades autónomas para garantizar que todo el alumnado tenga acceso a un equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) para uso educativo, con especial atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo; velar por el aprendizaje digital del alumnado con discapacidad, migrantes, que viven en centros de protección y los niños y niñas de etnia gitana; y mejorar la competencia digital del alumnado para garantizar el uso adecuado del contenido educativo.

Y en relación al profesorado: poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación TIC sobre metodologías de enseñanza activas; promover que todo el profesorado obtenga el reconocimiento de la competencia digital docente dentro del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente; capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo en colaboración con las administraciones educativas de las comunidades; crear materiales educativos abiertos tanto digitales como audiovisuales y desarrollar itinerarios didácticos para la educación a distancia; e impulsar políticas de cooperación territorial a través del Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

En relación al entorno familiar: poner en marcha recursos educativos y acciones de formación dirigidas a las familias y otros agentes de la comunidad educativa con el objetivo de formarles en competencia digital; y promover el acompañamiento a las familias en el proceso formativo digital de sus hijos.

En relación a la sociedad civil: fomentar la participación de la sociedad civil, a través del mecenazgo, para que al menos el alumnado que cursa la enseñanza básica tenga acceso a un dispositivo digital.

Y en relación al uso y acceso a las nuevas tecnologías: potenciar la investigación sobre el uso y el acceso a las nuevas tecnologías de los niños y adolescentes con una perspectiva de equidad, haciendo especial hincapié en las características y necesidades particulares de los estudiantes en desventaja cultural, social, económica o personal (discapacidad); adoptar medidas y programas para que toda la comunidad educativa haga un uso responsable y adecuado de los medios digitales garantizando en todo momento la protección de la infancia y la adolescencia frente al ciberacoso y otros delitos informáticos.

Además de instar a que apruebe un Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Congreso pide al Ejecutivo elaborar un protocolo o guía de actuaciones educativas en colaboración con las comunidades ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial; elaborar un nuevo plan de conectividad que tenga en cuenta las necesidades de Infraestructuras de telecomunicaciones en todo el territorio; apostar por los Recursos Educativos Abiertos (REA) en el proceso de aprendizaje, impulsando su incorporación en convivencia con los libros de textos; y apostar por el uso de herramientas educativas de difusión libre como medida de autonomía y ahorro.

RECHAZO AL MIR DOCENTE

Durante la Comisión se han debatido otras PNL, como es el caso a la relativa a impulsar la elaboración de una Ley de Ordenación General de la Profesión Docente, que ha sido rechazada por 21 votos frente a 15 a favor.

La Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP y que nalmente ha sido sustituida por una enmienda transaccional del PP, Cs y Vox, pedía al Ejecutivo la elaboración de un Proyecto de Ley de Ordenación General de la Profesión Docente que contemplase un nuevo modelo de sistema de acceso a la profesión docente y un diseño básico de la carrera profesional que considere la evaluación, la formación, los incentivos, la promoción y el desarrollo profesional.

En concreto, el documento pedía un sistema de acceso a la función docente inspirado en el MIR sanitario, que garantizase como criterios de selección el mérito y la capacidad; estuviese basado en el esfuerzo, la vocación y la implicación personal; y comportase la superación de una prueba de selección nacional, que incluyese las materias específicas de cada asignatura, seguida de una fase de formación de postgrado, de carácter teórico-práctico, que habilitase a los candidatos para el ejercicio de la profesión.

El documento también incluía reforzar los sistemas de formación permanente del profesorado en ejercicio, que se articularía en torno a: la formación para la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo; la formación en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación; la formación en lenguas extranjeras; y la actualización científica y didáctica en las distintas áreas, asignaturas o materias así como en la organización y dirección de los centros, en la coordinación didáctica, en la orientación y en la tutoría.

EL PAÍS

Los profesores españoles, entre los que menos incentivos reciben para integrar la tecnología en sus clases

Un nuevo informe de la OCDE pone de manifiesto las dificultades de los países para adaptarse al modelo de enseñanza 'online' que requiere la pandemia

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID 29 SEP 2020

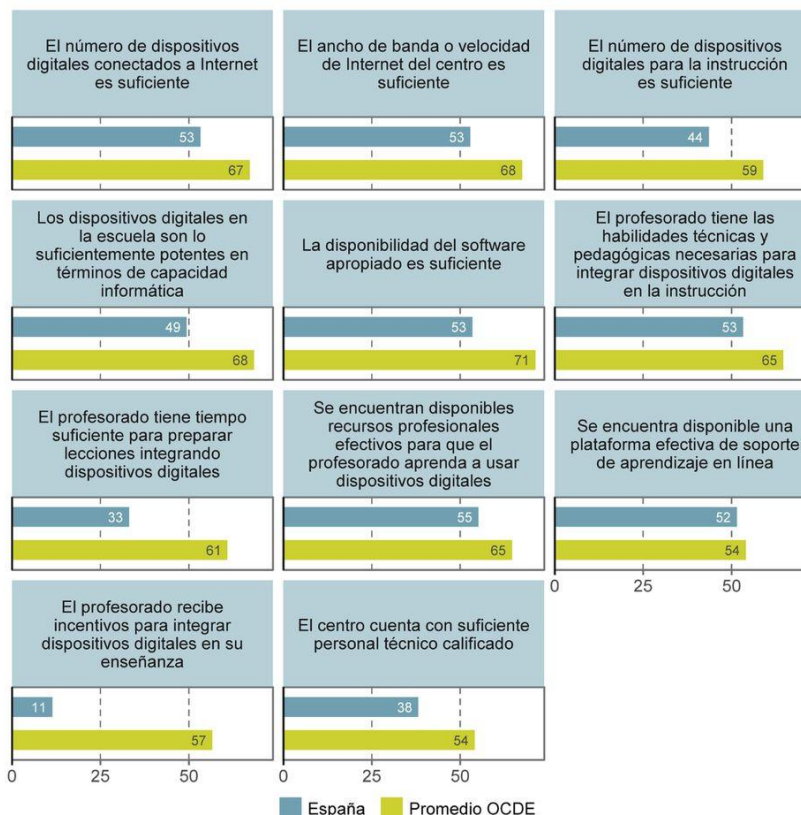
Desde que la covid obligó al cierre de las escuelas el pasado marzo en España, salieron a la luz las grietas tecnológicas de un sistema educativo obsoleto. Al hecho de que el 14% de los 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias no disponía de Internet en casa o de dispositivos digitales suficientes, se sumó la falta de competencias digitales de los docentes. Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto de manifiesto que el profesorado español está entre los que menos incentivos recibe “para integrar dispositivos digitales en la enseñanza”. En este punto, España está más de 40 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE.

“Esta crisis (en alusión a la pandemia) ha puesto al descubierto las carencias de muchos sistemas educativos en todo el mundo”, ha dicho este martes Andreas Schleicher, máximo responsable del informe PISA —que mide las competencias de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora de 79 países— en la presentación del estudio *Effective Policies, succesful schools* (en español, *Políticas efectivas, prácticas de éxito en los colegios*). El análisis ha sido elaborado a partir de las respuestas aportadas por los directores de centro y los alumnos en el informe PISA 2018, en el que España obtuvo sus peores resultados en ciencias y mostró un estancamiento en matemáticas. “Todos los países deberían hacer más esfuerzos para asegurar que todos los centros educativos disponen de los recursos necesarios para ofrecer a los alumnos igualdad de oportunidades”, ha añadido Schleicher.

En el informe PISA 2018, en el que se examinó a 36.000 alumnos de 15 años de 1.102 institutos, se realizaron diferentes preguntas a los directores de centro relacionadas con los recursos digitales a su alcance. En términos generales, España salía bien parada. Por ejemplo, mientras la media de los países de la OCDE mostraba que el 96,1% de los ordenadores de los centros estaban conectados a Internet, en España lo estaban el 99%. Otro indicador señalaba que según el 52% de los directores sus centros disponían de una plataforma de aprendizaje *online* “efectiva”, frente al 54% de media de la OCDE. Sin embargo, hubo una cuestión en la que España salió gravemente perjudicada: solo el 11,5% de los directores afirmó que el profesorado “recibe incentivos para integrar dispositivos digitales en su enseñanza”, es decir, en su forma de dar clase, frente al 56,7% de media del resto de países (en Alemania hicieron esa afirmación el 45,4% de los directores; en Italia el 49,4%, y en Francia el 71,8%).

Según el informe *Covid-19 y educación: problemas, respuestas y escenarios*, publicado por la Fundación Cotec el pasado abril tras analizar los datos del informe PISA 2018, en España hay diferencias significativas en las habilidades con las que cuentan los docentes para integrar herramientas digitales en el aula en función de la titularidad del centro. Mientras el 75,5% de los directores de la privada y el 68,9% de la concertada aseguraron que los docentes que trabajan en sus centros dominan esas técnicas, tan solo lo hizo el 45,5% de la pública.

“En la pública la formación es voluntaria y no está ligada a la equipación tecnológica del centro; en cambio, en la privada suelen ser planes integrales que implican compra de material y formación obligatoria”, explica Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Complutense. Además, hay otro factor, explica: “En la privada, basta con que el director quiera ir en esa línea, mientras que en la pública el director tiene que consensuar con el claustro el uso de la tecnología en el aula, y si un profesor se niega, nada se puede hacer”, añade.



ESCASEZ DE PERSONAL DOCENTE

Otro de los puntos en los que España muestra la debilidad de su sistema educativo es en el índice de escasez de personal docente. Mientras la media de los países de la OCDE se sitúa en el 0,01, los directores de los centros españoles reportaron un 0,33 —la media europea está en el 0,05—. Tal y como se remarca en el informe, el incremento de una décima en el índice de escasez de personal supone una pérdida en el rendimiento académico en comprensión lectora de 0.9 puntos en España. En cambio, las condiciones laborales de los docentes son mejores en España: mientras el 88% tienen contratos a tiempo completo, la media en los países de la OCDE es del 80% (79% en la UE).

europapress.es

El Gobierno aprueba el Real Decreto Ley para que se puedan contratar docentes sin el máster habilitante

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado este martes un Real Decreto Ley que permitirá, de manera excepcional y temporal, la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico que les habilite para ello, según anunció el pasado jueves la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.

Este Real Decreto Ley "contempla la posibilidad de reforzar de manera urgente las plantillas docentes, permitiendo la contratación de manera extraordinaria y temporal de aquellos docentes que cumplan con los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico", ha explicado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De este modo, las comunidades autónomas podrán realizar el refuerzo de las plantillas necesario para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad durante el curso 2020-2021, tal y como habían solicitado.

Esta medida permite que las administraciones educativas puedan nombrar funcionarios interinos para plazas adicionales de docentes derivadas de las medidas adoptadas a causa de la COVID-19 para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de FP, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y

diseño y escuelas oficiales de idiomas de titulados que no estén en posesión del máster que acredita la formación didáctica.

La cobertura de estas plazas, de carácter excepcional y limitado, podrá llevarse a cabo para las materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.

Las plazas creadas se amortizarán al finalizar el curso en el que desaparezcan los motivos de urgente necesidad que originaron su creación y la continuidad en el ejercicio de la docencia, así como el eventual ingreso posterior en la función pública de quienes hayan ejercido la docencia en estas condiciones excepcionales, sí exigirá estar en posesión del máster de posgrado.

El Real Decreto Ley contiene además otras importantes medidas educativas encaminadas a posibilitar el desarrollo del curso 2020-2021 en la actual situación de pandemia. Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las decisiones que se adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables.

Se adaptan también los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato, de forma que las administraciones educativas podrán autorizar su modificación para adecuarlos mejor a la situación provocada por la pandemia. Los equipos docentes valorarán de manera colegiada y global si se han alcanzado los objetivos de cada etapa.

Además, se suprimen las evaluaciones de final de etapa de educación Primaria y Secundaria Obligatoria, por contar con otras fuentes de información de rendimiento educativo del alumnado.

Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, sea de forma presencial o a distancia.

En cuanto a la Formación Profesional, se permite la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT), respetándose en todo caso el mínimo de horas establecidas en la ley.

En el caso de la FP de Grado Superior, este módulo de FCT se podrá integrar en el módulo de proyecto, y en el caso de la FP Básica y de Grado Medio, se podrá crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Además, será posible sustituir la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra alternativa.

En lo que se refiere a los certificados de profesionalidad de la Formación Profesional para el empleo, regulados por Real Decreto 34/2008, de 18 enero, también se establecen medidas excepcionales durante el curso escolar 2020-2021, para la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo, cuando no sea posible la realización efectiva en un ámbito empresarial.

Estas medidas se extienden también a las enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

EL PAÍS

El Gobierno permite de nuevo a las comunidades flexibilizar los criterios de evaluación para que los alumnos puedan pasar de curso por la pandemia

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto-ley que permitirá contratar a docentes en secundaria sin el máster siempre y cuando se hayan agotado las listas de interinos

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID 29 SEP 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá a los gobiernos autonómicos autorizar la modificación de los criterios de evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y bachillerato para “adecuarlos” a la situación provocada por la pandemia. Esto quiere decir que, tal y como sucedió en el último trimestre del curso, las autonomías podrán cambiar los criterios estipulados en la ley para poder aprobar el curso y obtener una titulación tanto en cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato. Además, el real decreto contempla que serán los equipos docentes los que valoren de forma “colegiada y global” si los estudiantes han alcanzado los objetivos de cada etapa.

Precisamente este tema de la flexibilización de los criterios de evaluación enfrentó a varias autonomías con el ministerio el pasado abril, mientras los colegios permanecían cerrados por la pandemia y la educación era 100% *online*. Madrid, Murcia y Andalucía —gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos— se opusieron entonces al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y los consejeros del ramo de las diferentes regiones que contemplaba que todos los alumnos podrían pasar de curso y obtener los títulos de su correspondiente etapa educativa salvo casos “muy excepcionales”. Esas tres comunidades exigieron entonces al ministerio que fijara un número máximo de asignaturas a partir del cual los alumnos (en ese momento 8,2 millones de estudiantes estaban confinados) no pudieran pasar de curso o titularse, y se acogieron a la Lomce (ley educativa en vigor aprobada por el PP en 2016), que establece que como norma general no se puede

pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y Bachillerato, ni titularse y hacer la selectividad con una materia pendiente.

“El pensamiento de que al rebajar el nivel de exigencia en los exámenes los alumnos no van a aprender es un clásico. Pero antes de eso, hay que mirar lo que dice la evidencia científica, que muestra que la forma de evaluar al final de curso sirve sobre todo para medir la memoria a corto plazo, por ejemplo, si el alumno se ha aprendido un listado de ríos. En cambio, los aprendizajes profundos requieren otros métodos de evaluación, más basados en el *feedback* constante entre profesor y alumno para que este conozca en todo momento en qué puede mejorar”, explica Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill —centrada en investigación educativa— que cree que el real decreto es un acierto.

El real decreto aprobado este martes por el Gobierno evitará que se vuelvan a producir esas confrontaciones entre comunidades, y cada una tome las medidas que considere oportunas en función de cómo evolucione la pandemia. Otra de las novedades es que el real decreto otorga el carácter de “orientativos” a los estándares de aprendizaje que los profesores deben evaluar, un elemento que introdujo el ministro José Ignacio Wert (PP) con la Lomce que generó el rechazo de los docentes. Desde ese momento (2016) cada una de las asignaturas pasó a tener 100 elementos a evaluar, lo que muchos docentes tildaron de “burocratización” de la evaluación. Además, ahora, las comunidades y los propios centros podrán adaptar las programaciones didácticas —los contenidos que los alumnos deben aprender— a las modalidades presenciales o semipresenciales derivadas de la pandemia. Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste “atención y apoyo” educativo al alumnado, sea de forma presencial o a distancia.

Ismael Sanz, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid (con el Gobierno del PP) y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, cree de esta medida solo tiene sentido si se hace de forma “muy excepcional”, ya que de alargarse en el tiempo podría provocar una bajada general del nivel de exigencia y una reducción del esfuerzo de los alumnos, de su dedicación y de las horas destinadas al estudio. “Los más perjudicados serían los alumnos que ahora sacan notas más bajas, que rebajarían todavía más su autoexigencia y podrían descolgarse del sistema”, apunta. Sanz menciona un estudio publicado recientemente por la London School of Economics que muestra que tras los cambios en los criterios académicos en Francia como consecuencia del movimiento de Mayo del 68, el grado de inserción laboral de esos jóvenes no presentó diferencias significativas en comparación con generaciones anteriores y posteriores.

Luz verde a la contratación de docentes sin el máster

El real decreto contempla de “manera excepcional y temporal”, la contratación de profesores en institutos sin el requisito del máster de Profesorado de Secundaria que ahora es necesario para impartir clases tanto en centros públicos como privados de ESO, Bachillerato y FP, así como en escuelas de música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y oficiales de idiomas. Se trata de una titulación que se obtiene tras cursar uno o dos años y que sustituyó al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Los docentes deberán cumplir con otros requisitos, como una titulación universitaria y, en buena parte de las comunidades, acreditar determinados niveles de idiomas. Las nuevas plazas se podrán crear en aquellas materias en las que se agoten las listas de interinos y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.

El Gobierno ha respondido así a la demanda de las comunidades autónomas, que solicitaron esa medida la semana pasada ante el temor de no encontrar profesores suficientes a lo largo del curso para cubrir las bajas médicas y hacer frente a los desdobles de grupos para reducir los ratios. Esta modificación permitirá a las comunidades reforzar las plantillas “para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad” mientras dure la pandemia durante el curso 2020-2021, ha señalado el Ministerio de Educación en un comunicado. Las nuevas plazas que se creen se darán por concluidas una vez que “desaparezcan los motivos de urgente necesidad” (en alusión a la pandemia) y aquellos profesionales que hayan ejercido la docencia en esas condiciones “excepcionales” deberán acreditar el máster para volver a concurrir a esas plazas públicas, establece el real decreto-ley.

Aunque los gobiernos regionales no llegaron a cuantificar cuántos profesores necesitan, coincidieron en que la preocupación es elevada en Matemáticas y Formación Profesional. Madrid y Castilla-La Mancha admitieron que tienen el problema sobre la mesa. Andalucía, Cataluña, y la Comunidad Valenciana, entre otras, reconocieron la semana pasada que temen encontrárselo a lo largo del curso, por lo que consideraron adecuado suprimir el requisito.

El Gobierno ha tomado esta determinación pese a la negativa de colectivos como la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación —integrada por 62 responsables académicos de universidades públicas y privadas—, que el pasado viernes manifestó su “profundo rechazo y perplejidad” ante la decisión del ministerio que, en su opinión, supone una “agresión directa a la profesión docente”, a las universidades, y a los miles de titulados “que en la última década no han tenido oportunidades de empleo o han sido empleados en condiciones precarias como consecuencia de la falta de oferta pública de empleo y la tasa de reposición cero impuesta en el sector” de la enseñanza. Recordaron que la exigencia del máster para ser habilitado como docente figura en la actual ley educativa.

Cambios en FP

En cuanto a la Formación Profesional, se permite la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT), respetándose en todo caso el mínimo de horas que establece la ley (220 horas). En el caso de la FP de grado superior, este módulo de FCT se podrá integrar en el módulo de proyecto, y en el caso de la FP básica y de grado medio, se podrá crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Además, será posible sustituir la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra alternativa.



Los directores de instituto de Madrid denuncian que cada centro tiene cuatro profesores de baja por COVID a diario que no se cubren

"Estamos solos", describe el presidente de la asociación de directivos la gestión educativa de la Comunidad, que lamenta que se impongan medidas sin consultar y que no hayan llegado los 70.000 ordenadores prometidos

Daniel Sánchez Caballero. 30 de septiembre de 2020

"Estamos solos". Esteban Álvarez, presidente de Adimad, la asociación de directores de instituto de Madrid, ha cargado duramente este miércoles contra la gestión educativa de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y ha dibujado un panorama preocupante –según su descripción– en los centros, que se sienten abandonados por una Consejería que nunca les ha consultado para tomar medidas sino que las ha impuesto, que no está al otro lado del teléfono cuando hace falta, donde los protocolos cambian y no responden a las necesidades de los centros y no llegan los medios tecnológicos ni sanitarios prometidos ni se sustituyen las bajas de profesores, según ha denunciado.

Álvarez ha desglosado una serie de problemas acuciantes que sufren a diario para los que no encuentran solución. El quizá más grave, ha explicado, es que cada instituto está teniendo de media 4-5 profesores de baja por COVID cada día que no se sustituyen (sean positivos o sospechosos de serlo, mientras esperan el resultado de las PCR), a los que hay que sumar las bajas habituales por otras razones, que en otoño suelen ser relativamente altas. "Esto iba a requerir una agilidad en las sustituciones tremenda, había que tenerlo muy preparado. No es fácil conseguir profesores para tantos centros", admite Álvarez. "Había que priorizar para que no se pierdan más horas lectivas". No se hizo.

A estas bajas y los problemas académicos que conlleva la falta de docentes se suman las de los alumnos, otras tres o cuatro al día, que conforman un problema sanitario en los centros. "Esto implica un número de casos al día que obliga a ese miembro del equipo directivo nombrado como responsable COVID a estar todo el día no haciendo su función principal, sino a ejercer prácticamente de rastreador", explica Esteban. Sin embargo, estas bajas no se traducen en cierres de aulas porque el protocolo no lo contempla así: como en Secundaria no hay "grupos estables de convivencia" y los alumnos tienen que llevar mascarilla, no se consideran contacto estrecho de un posible caso positivo.

El problema se agrava, ha explicado Álvarez, con una Consejería de Educación ausente. "Queremos que el contacto con la Dirección General de Salud Pública funcione", ha pedido en alusión a esa línea telefónica a la que deben llamar los colegios pero que comunica sin parar porque cuenta con tres profesionales para atender a más de 4.000 centros. "Necesitamos una respuesta en tiempo y forma a los problemas de los centros, que son muchos. Y no nos vale personal administrativo, necesitamos personal sanitario", ha añadido.

La contratación de este personal sanitario para los centros (solo han llegado 30 de las 300 enfermeras previstas) y que les permitan utilizar las plataformas tecnológicas que consideren (la Comunidad de Madrid ha vetado el uso de las herramientas de Google en los centros públicos) son otras de las reivindicaciones de Adimad. "Tenemos la sensación, con casos como estos, de que no nos están dejando trabajar", lamenta Álvarez.

Adimad sostiene que la Comunidad tampoco ha distribuido los medios que había prometido, a excepción del profesorado (aunque este llegara a última hora). "A nivel académico se ha establecido la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, lo que requiere una serie de medios que no disponen los centros. Se habló de 70.000 dispositivos y 6.000 cámaras. No han llegado ni uno. Se habló de la mejora de las redes de los centros. No se ha producido. Estamos compitiendo entre nosotros por los geles, las alfombrillas sanitarias, teniendo que ir a polígonos a comprarlas", ha descrito.

La falta de medios informáticos está afectando a la docencia, que se estableció semipresencial a partir de 3º de Secundaria. "Estamos teniendo los mismos problemas que en junio, pero con un problema añadido: hay que atender a los alumnos en casa y clase. No hay instalación ni medios para mantener la actividad lectiva con los alumnos en el aula y su casa. No hay redes e infraestructuras. Estamos prestando nuestro material informático [de los centros], pero como tenemos alumnos en el instituto también los necesitamos nosotros", explica el representante de los directores madrileños.

Álvarez ha dibujado un panorama en el que la Consejería va a la suya desde la primavera, sin consultar las medidas con los afectados, como se ha hecho en regiones como la Comunidad Valenciana, y que va cambiando de opinión según van pasando los días. En el que todo llega tarde y mal. Una consejería que en primavera les comunicó (no negoció) unos criterios para la vuelta al cole, que el 28 de agosto cambió los escenarios para crear otro nuevo, echando por tierra el trabajo en los centros de todo el verano, y que este cambio de criterio viniera sin aviso ni agradecimiento. "La sorpresa fue –además del cambio en sí– que nos dijeran que no había cambios, que estaba previsto así. Habría sido de agradecer, a la vista del trabajo que hicimos, que reconocieran al menos un cambio de opinión", ha valorado Álvarez.

El presidente de Adimad ha cerrado realizando una llamada a la responsabilidad de cada uno: "Exigimos que todas las medidas se pongan en marcha de forma inmediata y que cada uno asuma la responsabilidad y las consecuencias de las medidas adoptadas, lo que suele ocurrir pocas veces", ha afirmado Álvarez, aunque también ha matizado que no les corresponde a ellos pedir la dimisión de nadie. "Hace unos días el consejero nos envió una carta agradeciéndonos nuestro trabajo y colaboración. Nosotros lamentamos mucho no tener nada que agradecer", ha cerrado.

europapress.es

Los sindicatos, divididos por la norma que permite a alumnos pasar de curso sin límite de suspensos: "Genera confusión"

CSIF, STES y ANPE rechazan duramente la medida, mientras que CCOO y UGT no ven "polémica" en ella y la justifican

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos se han mostrado divididos a la hora de dar su opinión sobre el Real Decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE, que recoge la posibilidad de que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de asignaturas suspensas.

Así, desde el sindicato STES consideran que esta medida es "enormemente polémica". Si bien entienden que puede haber "un consenso general" a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos, critica que el Ministerio ha dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas esta competencia, que corresponde al Ministerio. "Lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste", aseguran a Europa Press desde STES.

Por su parte, el sindicato CSIF pide la dimisión de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por "ocultar" al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores estas medidas contempladas en el Real Decreto Ley.

Asegura que durante la Mesa Sectorial de Educación de este pasado lunes, en la que la ministra reunió a los sindicatos, el Ministerio no presentó dicho Real Decreto ley, lo que para el sindicato supone "una falta de respeto hacia los representantes de los docentes, obviando una vez más una negociación necesaria y pertinente". Y denuncia también que la norma tampoco ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, como es preceptivo en las normas educativas.

"Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad", asegura CSIF, que ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando su posible impugnación.

El sindicato exige que se concrete el número de materias suspensas para pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, ya que esto "provocará más desigualdades".

También el sindicato ANPE está en desacuerdo con la nueva norma, ya que señala que no se puede dejar la responsabilidad de regular los criterios de promoción y titulación a las comunidades autónomas y de modificarlos a los centros.

"Es competencia del Estado la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora", precisa.

Así, considera que con esta norma "no solo se quiebra el principio de seguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación", pues esta decisión "agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas".

CCOO Y UGT ATRIBUYEN LA MEDIDA A LA SITUACIÓN DE EXCEPCIÓN

Por el contrario, la responsable de educación de UGT, Maribel Loranca, considera "razonable" la medida, ya que entiende que se ha aprobado dada la situación extraordinaria que vivimos por la pandemia y porque no se puede garantizar la educación presencial en todos los niveles y etapas educativas "por falta de voluntad política e inversión".

En este sentido, Loranca recuerda que las medidas que contempla el Real Decreto ley se plantean de manera "imperativa" y, por ello, "será fundamental el desarrollo que de las mismas hagan las comunidades autónomas". "La autonomía de los centros y de los equipos docentes a la hora de decidir la promoción del alumnado ha sido una práctica frecuente y desde la UGT queremos huir de polémicas que más que a criterios pedagógicos responden a intereses de otra naturaleza", zanja.

En la misma línea se ha manifestado CCOO. El secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Francisco García, justifica esta medida a la excepcionalidad de la situación actual y las consecuencias derivadas de ello, como es la adopción de modos de enseñanza semipresenciales y la posibilidad de que los alumnos tengan que guardar cuarentena.

"No veo grandes cambios, al final la evaluación depende del trabajo que haga el alumnado y el profesorado, que con su profesionalidad y su autonomía acaba tomando estas decisiones; y en esta situación, esto se parece mucho a cómo se reguló el fin de curso pasado", expone.

LA VANGUARDIA

Cada euro que un país invierte en educación revierte en 20 de beneficio

El gasto educativo se traduce en sueldos más altos, más ingresos fiscales y menos gasto sanitario

XAVIER MAS DE XAXÀS. 01/10/2020

La educación no es un gasto, es una inversión. Esta debe ser la frase más repetida desde hace décadas por políticos y gestores de la educación en todo el mundo. Mientras unos políticos se la toman en serio, para otros es mera retórica a pesar de que numerosos estudios del Banco Mundial, Naciones Unidas, el FMI, la OCDE y otras instituciones demuestran que el dinero invertido en educación tiene un impacto directo en el crecimiento económico de un país.

La Conference Board de Canadá, por ejemplo, ha calculado que por cada euro invertido en educación se obtienen seis de beneficio, mientras que la Administración Obama llegó a una conclusión similar: cada dólar invertido en educación preescolar reportaba 8,6 de beneficio.

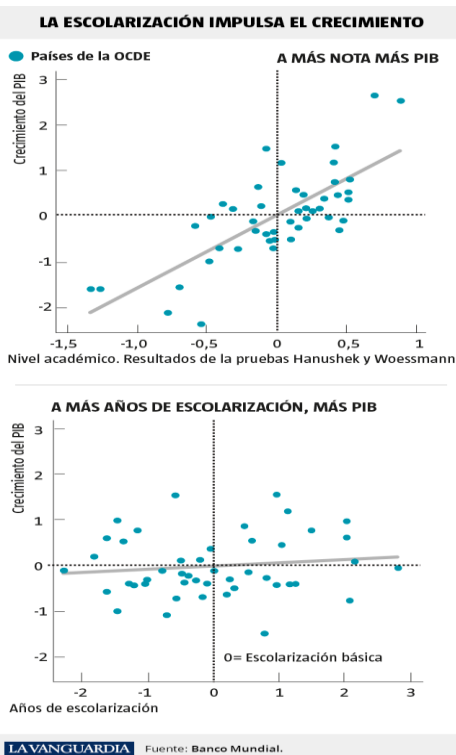
Un estudio del Banco Mundial a partir de sus propios indicadores de desarrollo concluye que por cada dólar invertido en educación la economía de un país puede ganar una media de 20 dólares, según afirma el economista Fabrizio Carmignani de la universidad australiana de Griffith. La relación inversión-beneficio se mantiene en euros.

Asimismo, cada punto porcentual extra de los presupuestos de un Estado invertido en educación repercute en un crecimiento del 0,9% del PIB. Los economistas Eric Hanushek (Stanford) y Ludger Woessmann (Universidad de Munich) han calculado que incluso con un gasto en educación bajo –del 3,5% del PIB,- la economía de un país puede crecer 30% adicional en 50 años si se aplica un programa de excelencia.

Los beneficios son incluso mayores en los países con economías medias y bajas, como ha demostrado la premio Nobel de Economía 2019 Esther Duflo.

Este beneficio es tanto económico como social. Al escolarizar a los niños de dos a cinco años no sólo se les da una ventaja educativa, sino que los padres reciben un impulso económico al poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Asimismo, los alumnos que reciben una educación de calidad tendrán salarios más altos cuando sean mayores. Un estudio de Unicef en 73 países determina que cada dólar invertido en educación hace crecer los futuros salarios/hora de estos niños entre 6,4 y 17,6 dólares.

Los países europeos invierten de media y aproximadamente un 5% del PIB en educación. España, sin embargo, destina el 4,2%, una inversión que es decreciente (en el 2010 era el 4,9%) y que la sitúa a la cola de Europa. Catalunya, a su vez, está a la cola de España, con el 3,6%. La inversión por estudiante en España es de 6.582 euros, mientras que la media de la UE es de 7.210. En consecuencia, España es el país de Europa con más fracaso escolar (17,3%) y sus alumnos están por debajo de la media en las pruebas PISA que evalúan sus aptitudes.



Los presupuestos que ahora prepara el Gobierno, así como el plan de reconstrucción que debe presentar a Bruselas para salir de la crisis de la Covid-19, son una oportunidad única para corregir este déficit. El dinero, sin embargo, como apuntan los expertos, no lo es todo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una nueva ley de educación –la octava desde la recuperación de la democracia– pero sin un amplio pacto político que propicie un cambio radical del sistema no hay nada que hacer y, de momento, PP y PSOE están muy lejos de esta colaboración.

El pasado agosto, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo que “la educación abre oportunidades y reduce desigualdades (...). Es el primer motor de desarrollo sostenible”. La pandemia ha trastocado los planes educativos en casi todos los países del mundo por lo que “nos enfrentamos a una catástrofe generacional que puede malgastar un potencial humano que estaba por descubrir, socavar décadas de progreso y exacerbar desigualdades enquistadas”. La única salida es “incrementar los presupuestos de educación”.

“La educación abre oportunidades y reduce desigualdades. Es el primer motor de desarrollo sostenible”

ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

A principios de septiembre, el gobierno holandés anunció una inversión de 20.000 millones de euros en cinco años en educación, investigación e infraestructuras. Al presentar este “fondo para el crecimiento económico”, el ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, dijo que “para salir de esta crisis hemos de invertir en innovación para crear los empleos del mañana y completar la transición a una economía sostenible”.

El FMI aconseja a los países de las economías europeas más avanzadas y que viven más cerca de la frontera tecnológica que inviertan más en educación para estimular el crecimiento de la zona euro.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, considera que “uno de los reveses más dramáticos en la historia europea ha sido ver como Europa empezaba a retroceder en educación. Invertir en educación no aporta beneficios inmediatos pero sin inversiones y una reforma radical de los sistemas educativos ningún país puede aspirar a competir con efectividad en la economía de mañana”.

“Sin inversiones y una reforma radical de los sistemas educativos ningún país puede aspirar a competir con

efectividad en la economía de mañana”. KRISTALINA GEORGIEVA, DIRECTORA GERENTE DEL FMI

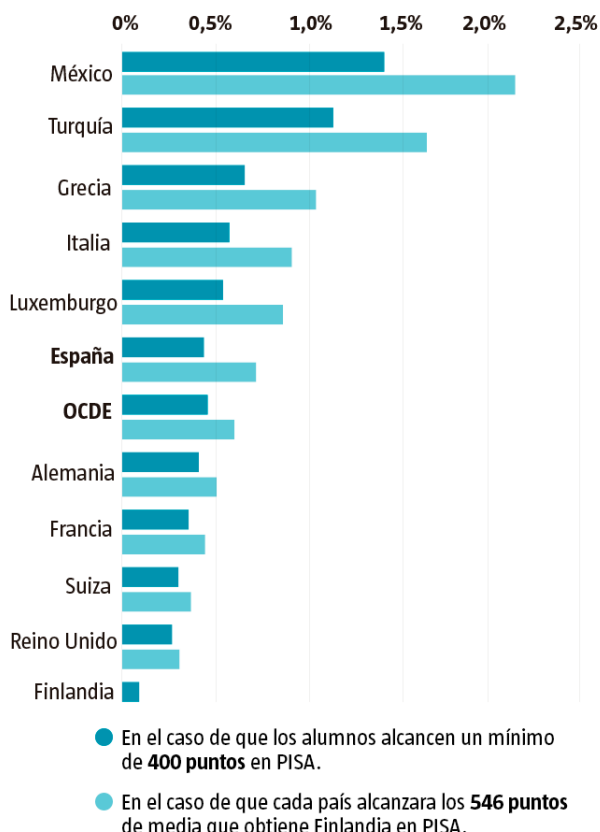
Entre los beneficios monetarios de una buena educación está la mejora del capital humano, que a su vez mejora la productividad y la expansión de empresas con alto valor añadido en un entorno de salarios altos.

Entre los beneficios personales destaca la salud por encima de todo porque una persona que ha tenido una escolarización de calidad tiene un mayor control sobre su vida. No solo come mejor y se cuida más sino que evita con más frecuencia los riesgos para una mala salud, como el abuso de las drogas, los embarazos juveniles y las enfermedades silenciosas, aquellas como las cardiovasculares, la diabetes y la obesidad que se conllevan sin reportarlas. Una mala educación aumenta el riesgo de dependencia económica de terceros, lo que a su vez aumenta el riesgo de violencia y depresión.

El Estado se beneficia de un ciudadano bien educado no sólo porque contribuye a mejorar la competitividad de la economía sino porque paga más impuestos (su salario es más alto) y también porque utiliza menos prestaciones sociales al ponerse menos enfermo y tener muchas menos posibilidades de quedarse sin empleo.

INCREMENTO ADICIONAL Y ANUAL DEL PIB ENTRE 2015 Y 2090

ATRIBUIBLE A UNA MEJORA SUSTANCIAL DEL APRENDIZAJE,
EN PORCENTAJE DEL PIB ACTUAL



LA VANGUARDIA

Fuente: Banco Mundial.

Los países con los estudiantes más preparados, como Finlandia o Corea del Sur, hace décadas que alcanzaron pactos nacionales por la educación con el objetivo de que sus sistemas educativos fueran universales y de gran calidad.

En España esto no ha sido posible porque, como explica Eduard Vallory, presidente de Unesco Catalunya, "porque hay una gran guerra cultural en torno a la educación". El resultado es que "se ha protegido los derechos adquiridos de las familias que tienen acceso a una buena educación (escuelas concertadas) y se ha igualado a la baja, es decir, se ha consolidado un sistema basado en el bienestar mayoritario del funcionario público (el maestro) que no coincide con el bienestar educativo básico de los alumnos".

"La educación no solo reparte mejor la riqueza

porque elimina desigualdades, sino que la crea"

EDUARD VALLORY, Presidente de Unesco

Catalunya

José Ramón Pin Arboledas, profesor de IESE, está de acuerdo con Vallory en que este igualitarismo a la baja es fruto del peso de la ideología progresista en las cátedras de pedagogía, donde "dominan los conceptos anticapitalistas" y, en consecuencia, "los alumnos reciben el mensaje de que el Estado ha de resolverles los problemas. Es un error básico que explica que en España tengamos pocos emprendedores".

Vallory critica que el Estado no vea que "la educación no solo reparte mejor la riqueza porque corrige las desigualdades sociales sino que, por encima de todo, crea riqueza. Pero a mucha gente de las clases media y alta esto no le interesa porque quieren que solo sus hijos, no los hijos de familias pobres, puedan acceder a los mejores empleos, y el Estado les ayuda a consolidar este tipo de escuela".

Josep Maria Vilalta, secretario ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas, destaca que las familias de las clases media y alta compensen la falta de financiación pública pagando las matrículas de las escuelas concertadas, pero, al mismo tiempo, este esfuerzo demuestra la debilidad del sistema educativo español, un sistema, además, "poco equitativo, que no favorece el ascensor social que ha de ser la educación".

Uno de los mejores ejemplos de la educación como motor del ascensor social es el de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia desde finales del 2019. Hoy es la primer ministra más joven del mundo (nació en 1985) pero de pequeña recuerda que "era la alumna más pobre de mi clase".

Finlandia ha conseguido que su sistema educativo catalice los avances tecnológicos, los mismos que sostienen el crecimiento económico a largo plazo. Lo mismo hace Corea del Sur, Japón y otros países que están cerca de la frontera tecnológica: invierten en excelencia educativa, innovación y desarrollo porque han de alimentar las plantillas de unas empresas que producen tecnologías muy avanzadas.

España no tiene muchas empresas de este nivel. Un tejido industrial con poco valor añadido, una política industrial basada en el turismo y los salarios bajos, no incentiva la innovación y, de rebote, no obliga a forzar el paso de la educación.

"Tenemos un tejido industrial que favorece el abandono escolar y para corregirlo es necesario subir el

salario mínimo" MIQUEL PUIG, ECONOMISTA

Esta realidad la ha estudiado a fondo Miquel Puig, economista especializado en educación. En La gran estafa, un ensayo que publicó en el 2015 con la esperanza de que ayudara a regenerar España y sacarla de la mediocridad, proponía subir el salario mínimo para mejorar la calidad del empleo y, de rebote, el sistema educativo. "Tenemos un tejido industrial -dice- que favorece el abandono escolar, especialmente en Baleares y

la costa mediterránea, donde el trabajo estacional es muy tentador para muchos jóvenes. Para corregir este fracaso -el más elevado de Europa- España debería subir el salario mínimo porque cuanto más caro sea un salario más formación exigirá el empleador”.

La tasa de trabajos no cualificados en España, por ejemplo, es el triple que en los países europeos de nuestro entorno. Esta oferta laboral tan pobre desincentiva la inversión en educación, lo que a su vez castiga la productividad de la economía.

Conseguir una educación de primer nivel debería ser el objetivo prioritario para revertir esta situación. Pin Arboledas reconoce la gran dificultad de llevar a cabo esta transformación. La calidad de la educación primaria y secundaria, así como de la formación profesional, es baja e impide tener buenos profesionales en muchas profesiones.

Aunque España tenga centros universitarios de primer nivel, como las escuelas politécnicas y de negocios, Pin Arboledas lamenta que haya pocos estudiantes enfocados a las ciencias y técnicas porque es torno a estas facultades donde “crecen los polos de desarrollo de un país, como demuestran Silicon Valley y el área de Boston”.

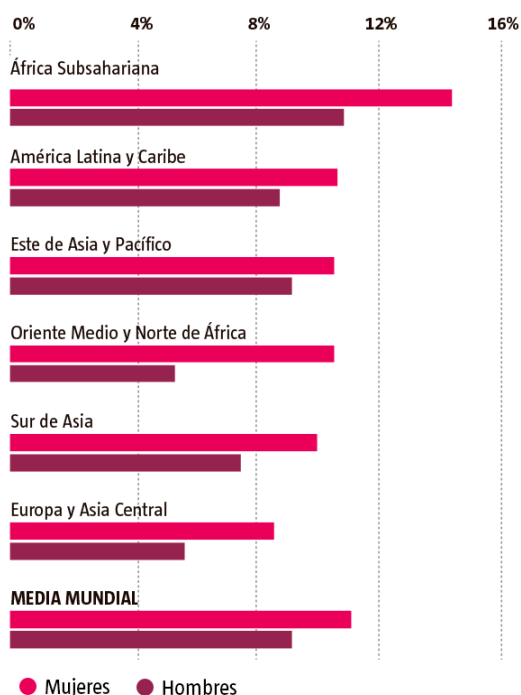
La advertencia de Kristalina Georgieva a Europa va, precisamente, en esta dirección. La UE se propone ahora recuperar el terreno perdido en educación científica y técnica frente a las economías más avanzadas de Asia. La pandemia, en este sentido, es una oportunidad.

Vilalta, sin embargo, recela de que los políticos españoles sepan aprovecharla: “Hay una enorme distancia entre la retórica y la acción política en educación, entre lo que se dice y lo que se acaba haciendo”. Vallory comparte el pesimismo. Recuerda su paso en el 2017 por la subcomisión de educación del Congreso de los Diputados, última vez que se abordó la asignatura pendiente del pacto nacional: “se impuso una lógica de tertulia radiofónica, en la que unos hablaban de dinero y otros de contenidos y no había ninguna voluntad ni de sistematizar el diálogo ni de llegar a un acuerdo”.

Pin Arboledas opina que la falta de un pacto por la educación “es el peor fallo de toda la democracia en España” y lo atribuye a la preponderancia de la ideología: “Deberíamos confiar la construcción de un nuevo sistema educativo a profesionales independientes que sólo se muevan por criterios técnicos”.

PORCENTAJE MEDIO DE INCREMENTO SALARIAL POR CADA AÑO ADICIONAL DE ESCOLARIZACIÓN

MÁS ESCOLARIZACIÓN SE ASOCIA AUTOMÁTICAMENTE
A SALARIOS MÁS ALTOS



LA VANGUARDIA Fuente: Banco Mundial.

Michael Kremer, profesor de Harvard y premio Nobel de Economía en el 2019, considera que “tener libros de texto no implica un mejor rendimiento escolar. Los recursos no siempre sirven porque la barrera siempre está en el método de enseñanza que, por lo general, no está bien ajustado a las necesidades del estudiante”. “Hay problemas políticos sistémicos –añade– en el núcleo de las estrategias educativas fallidas”.

España, con siete reformas educativas desde 1980, y fuertes debates culturales en torno a la religión como asignatura curricular, es un ejemplo de cómo la ideología afecta a la educación y, por lo tanto, al crecimiento económico.

“Los políticos –añade Vallory– creen que no pueden hacer mucho por cambiar el sistema. Se mueven en el cortoplacismo (cuatro años como máximo) sin creer de verdad que la educación es una herramienta para el cambio social y económico”. “Necesitamos, al menos, una estrategia a diez años para alcanzar de manera sostenible un gasto equivalente al 5% del PIB”, sostiene Vilalta.

El dinero, en todo caso, como recuerdan Vallory y Vilalta, no lo es todo. Es más, no sirve de nada invertir en educación si no sirve para crear un sistema nuevo. Corea del Sur, por ejemplo, en los años cincuenta, después de la guerra que lo segregó del norte, era un país destrozado con una

tasa muy baja de alfabetización. En 1995 alcanzó la educación universal de calidad para todos los niños y jóvenes hasta los 18 años. Hoy es una de las economías más competitivas del mundo.

Hay una diferencia entre escolaridad y aprendizaje: los alumnos que acaban sus estudios sabiendo leer y

escribir bien ganan un 38% más que los que no

Jaime Saavedra, director de educación en el Banco Mundial, distingue entre escolarización y aprendizaje. “La calidad de la educación tiene más importancia que los años de escolarización. Es verdad que los adultos que pasan por el colegio aprendiendo sólo lo más elemental tienen salarios que son un 6% más altos que las personas que no se han escolarizado, pero los adultos que acaban la escuela sabiendo leer y escribir bien ganan un 38% más”. La pobreza de aprendizaje representa el 53% de la educación en países de rentas medias y bajas.

Saavedra, que fue ministro de Educación de Perú, recuerda que su país “hizo un gran esfuerzo económico entre el 2009 y el 2015 para mejorar el sistema, pero solo logró avanzar gracias a la acción concertada entre maestros, autoridades, familias y comunidades”. Perú, que en 1995 tenía un PIB de 53.300 de dólares, hoy tiene uno de 222.000 millones, cuatro veces más.

“El sistema educativo en España evoluciona de manera lineal mientras que la sociedad lo hace de forma

exponencial” EDUARD VALLORY, PRESIDENTE DE UNESCO CATALUNYA

“Nuestro sistema educativo —explica Vallory— se transforma de manera lineal mientras que la sociedad evoluciona de forma exponencial. Aún oímos hablar de planes de digitalización, hoy, en el 2020. Si el sistema educativo no se adapta a los retos que afronta la sociedad solo sirve para cubrir las necesidades básicas pero no capacita a la mayoría de la población y, en consecuencia, no se crea el capital humano que el país necesita para crecer”.

“Sólo los países que apuestan de forma decidida por una educación transformadora, de calidad y equitativa —dice Vilalta— podrán avanzar como sociedades de progreso y bienestar”.

El economista Thomas Pickerty, estudioso del capitalismo y sus desigualdades, concluye que, “a la larga, la mejor manera de reducir las desigualdades con respecto al trabajo, aumentar la productividad de la fuerza laboral y el crecimiento de la economía en general es, sin duda, invirtiendo en educación”.

EL PAÍS

El desastre de los institutos madrileños: sin medios, sin sustituciones, sin protocolo eficaz

La asociación de directores de centros de secundaria exige al Gobierno regional que cumpla con las promesas que hizo hace un mes

BERTA FERRERO. MADRID 01 OCT 2020

El mayor gesto que los directores de los institutos madrileños han recibido de la administración durante la crisis sanitaria llegó a mediados de septiembre en forma de carta. En la misiva, el Consejero de Educación, Enrique Ossorio, les agradecía el trabajo realizado. Pero ellos quieren hechos, no zalamerías. Por eso, el presidente de Adimad, Esteban Álvarez, enumeró las promesas incumplidas hasta el momento del Gobierno y el caos de los centros. “Estamos solos”.

Cuando en un instituto un alumno es diagnosticado con positivo por coronavirus, comienza una rueda de incertidumbre en el que se ven implicados los compañeros, los familiares, los profesores y el coordinador Covid, esa figura que la administración regional se inventó para que iniciara el protocolo de actuación en cuanto hubiera un infectado. En ese momento, el coordinador se pasa horas recabando información y datos de todas las personas con las que el positivo ha estado en contacto. Para eso, hay que tener en cuenta que en un instituto los alumnos cambian de clase en función de las asignaturas optativas que ha elegido. Por lo que cuando por fin obtiene todos los datos, el coordinador —por lo general un miembro del equipo directivo, no un sanitario— llama al teléfono de la Dirección General de Salud Pública y solo recibe silencio.

“Nadie coge el teléfono. Nunca. Por lo que acabamos mandando un correo que, si tenemos suerte, nos responden a los cuatro o cinco días para decir que no hagamos nada”, explica el presidente de Adimad, la asociación que agrupa a los institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Al día, cada uno de los 300 centros de secundaria de la región añade a la lista entre uno o dos positivos nuevos. “En algunas zonas suelen ser tres o cuatro”, admite Álvarez. “Y la respuesta que dan en Salud es que no hay contactos estrechos porque como se tiene que garantizar la distancia interpersonal de un metro y medio... Así que nada, que no se haga nada”.

El caos y miedo se sirve entonces en bandeja fría. Porque esta situación ya la previeron los directores a finales de agosto, cuando en una reunión con el propio Consejero de Educación le instaron a que copiara el sistema implantado en la Comunidad Valenciana, que había trabajado durante todo el verano en elaborar un protocolo de actuación en el que a cada centro educativo se le asignaba un centro de salud, así se evitaba un embudo. Hubo oídos sordos.

Ahora sufren las consecuencias de aquello. Por eso, un mes después de que la administración les hiciera cambiar los planes y la organización cuando faltaba una semana para que empezara el curso, los directores decidieron convocar ayer a la prensa para enumerar al desastre en el que están inmersos.

Promesas incumplidas

El protocolo no funciona. Los profesores de baja no son sustituidos. Tampoco los auxiliares, el personal administrativo o de limpieza. Los 70.000 dispositivos que prometieron no han llegado. Las 6.000 cámaras que iban a instalar tampoco. Los centros que estaban mal equipados y con conectividad pésima, siguen sufriendo las mismas deficiencias. De los 300 profesionales sanitarios que prometieron, solo han llegado 30.

“La Consejería ha perdido bastante credibilidad con esta política errática que ha tenido durante este tiempo”, añadió María Ángeles González, vicepresidenta de la asociación de directores.

De hecho, de los 10.610 docentes prometidos para reforzar el curso, algunos todavía están llegando a cuentagotas, en parte por los contratos inestables que la administración les ofrece. “Lo he sufrido en mis propias carnes, porque a mi centro vino un profesor de Ayamonte, casado y con dos hijos, y al día siguiente de llegar, se fue. ¿Por qué? Porque le ofrecían media plaza, que ya es el colmo porque cobras la mitad. Así no compensa y prefiere quedarse en su casa, que seguramente vivir allí le cuesta menos que aquí”.

Por todo eso, explica Álvarez, la asociación de directores lamenta “no tener que agradecer nada a la Comunidad”, en referencia a la carta de elogios que recibieron, “y lo que toca ahora es exigir”.

Por lo pronto, tal y como está la situación sanitaria de la región, temen que de aquí a unas semanas “toque un nuevo escenario, el del confinamiento total”. “Estamos utilizando nuestros propios recursos, yendo a comprar y compitiendo entre nosotros porque al final no hay stock. Eso no se puede permitir”, lamenta el director, que remata el análisis de la situación con una petición de auxilio: “No solo estamos solos. Estamos atados de pies y manos”.

THE NVERSATION

La enseñanza personalizada será el futuro de la educación

Francisco López Rupérez. 29 Septiembre 2020

Gordon E. Moore –cofundador de la famosa compañía tecnológica INTEL– formuló en 1965 lo que se conocería después como Ley de Moore. En su versión definitiva, establecía que aproximadamente cada dos años se duplicaría el número de transistores contenidos en un microprocesador. Ello supondría un aumento, en progresión geométrica, de su capacidad de computación.

Revolución tecnológica y transformación digital

En lo esencial, esa predicción se cumplió y explica lo que hoy conocemos como revolución digital, cuya influencia sobre los individuos, sobre la economía y sobre la sociedad da cuenta, en buena medida, de los cambios acelerados que se vienen observando en lo que va de siglo.

La transformación digital es heredera de dicho cambio tecnológico y comporta su incorporación a las diferentes áreas de una organización; en particular, a la definición de sus procesos y a la concepción de sus estrategias. En sí misma, se trata de una forma de modernización de las organizaciones que está adquiriendo un carácter transversal a todos los sectores de actividad.

La transformación educativa

En este contexto, la educación escolar no debe quedarse atrás y, sin perjuicio de la preservación de sus irrenunciables bases humanistas, ha de asumir el desafío de integrar el pasado con el porvenir, beneficiándose de las múltiples palancas modernizadoras que ofrecen –y ofrecerán más aún en el futuro– las tecnologías digitales.

Parafraseando la conocida cita atribuida a André Malraux, la transformación educativa será digital o no será. La efectividad de la aplicación de las tecnologías digitales en la enseñanza ha producido cierta decepción cuando su impacto sobre los resultados de los alumnos ha sido sometido a evaluación.

Como ha advertido la OCDE a partir del análisis de datos a gran escala, “no siempre más tecnología es mejor”. La idea clave que emerge de la investigación sistemática consiste en que no son las tecnologías, por sí mismas, las que mejoran los procesos de aprendizaje y los resultados de los alumnos, sino la forma en la que se integran en los procesos de enseñanza, es decir, la concepción e implementación de metodologías didácticas adecuadas.

Pero, del mismo modo que la integración de las tecnologías digitales en la enseñanza no contribuye significativamente a la mejora de los aprendizajes escolares si no forma parte de un modelo instruccional bien pensado y bien implementado, un modelo instruccional ambicioso y potente no será viable –ni sostenible a gran escala– sin la ayuda de las tecnologías digitales y de sus desarrollos futuros, particularmente de la Inteligencia Artificial de última generación. Y ese modelo instruccional no es otro que el de una enseñanza personalizada.

La enseñanza personalizada y la Inteligencia Artificial

El Departamento de Educación de los Estados Unidos, en el marco de su Plan Nacional de Educación Tecnológica, ha formulado la siguiente descripción sintética de esa noción que cuenta, no obstante, con una larga tradición pedagógica:

“El aprendizaje personalizado se refiere a la instrucción en la cual el ritmo de aprendizaje y el enfoque de la enseñanza están organizados de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. Los objetivos de aprendizaje, el enfoque de la enseñanza y los contenidos de la instrucción y su secuencia pueden variar en función de las necesidades del alumno. Además, las actividades de aprendizaje son significativas y relevantes para los alumnos, están orientadas hacia sus intereses y, a menudo, son emprendidas por su propia iniciativa”.

Las dificultades que en otros tiempos planteaba la implantación de la enseñanza personalizada –cuando estaba apoyada tan solo en recursos soportados en papel– son ahora solventadas, con notables ventajas, por las posibilidades que pueden ofrecer plataformas inteligentes capaces de:

- Organizar múltiples recursos de enseñanza de un modo flexible, de diferentes formas e integrados en diferentes secuencias posibles de aprendizaje.
- Adquirir representaciones sobre cómo los alumnos usan el sistema, lo que permite efectuar juicios sobre las características del aprendizaje de cada estudiante y sobre sus resultados, con vistas a su posterior facilitación.
- Reiterar –de acuerdo con la información que emana de la interacción con el alumno– los aprendizajes de conceptos y de procedimientos, aunque empleando en cada caso recursos diferentes y secuencias de aprendizaje alternativas y adaptadas, hasta conseguir el dominio, por parte del alumno, de los conocimientos y de las habilidades deseados.
- Proporcionar a los estudiantes un **feedback** personalizado, basado en datos, que permita corregir sus errores y aprender de la experiencia.
- Facilitar al profesor, en su actividad docente, la toma de decisiones estratégicas, de planificación, de orientación y de apoyo personal a los alumnos, fundadas empíricamente.
- Dotar al profesor de un caudal de información relevante para las familias sobre la marcha escolar de sus hijos.

Una versión poderosa de la enseñanza híbrida

Más allá de esa versión modesta de la noción de enseñanza híbrida, que ha saltado súbitamente a la palestra de la mano de la pandemia del coronavirus, una versión más poderosa de dicho concepto deberá comportar la integración de los tres pilares siguientes:

1. Una personalización de la enseñanza con metodologías centradas en el alumno.
2. Un enfoque del currículo por competencias, con la ambición propia de un aprendizaje para el dominio (*Mastery Learning*).
3. El uso de las tecnologías digitales en la enseñanza, con el empleo de la inteligencia artificial aplicada a lo anterior.

Cómo lograrlo

Para el logro de esta transformación digital de la educación escolar, solo una cooperación franca y leal entre los poderes públicos, las compañías tecnológicas, los editores y el profesorado podrá hacer realidad ese sueño ilustrado, todavía incumplido, de lograr una educación de calidad para todos.

Entrevista a Pedro Uruñuela, nuevo Consejero de Educación de La Rioja.

No sé si habrá sido casualidad o una genialidad contar con un experto en convivencia escolar para arreglar la maltrecha convivencia de la comunidad educativa riojana.

JOSÉ M^a DE MOYA Martes, 29 de septiembre de 2020

Administrar la Educación de su tierra no puede ser un mejor cierre para Pedro Uruñuela, que no es precisamene un recién llegado a todo esto. Autor de numerosos libros y decenas de artículos sobre organización escolar y, más concretamente, sobre su pasión: la convivencia en las aulas. Además, peina canas en la función pública y en la actividad política. Estos son, tal vez, los tres ingredientes que faltaron a su predecesor, Luis Cacho, que apenas duró un año y que generó mal clima en la tranquila Educación riojana. Cacho logró algo muy difícil: ponerse enfrente de la Pública y de la Concertada, de los tuyos y de los adversarios. Uruñuela lo explica bien: “En Educación no puedes imponer, sino consensuar, y creo que eso él lo desconocía”.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de la salida intempestiva de su antecesor?

Respuesta. —Me sorprendió encontrarme con tan mal clima, aunque personalmente no tuve mala relación con él. De hecho, me he quedado con cosas buenas como su plan de contingencia.

¿Le pudo faltar capacidad política y conocimiento de la función pública?

—En efecto, su trabajo pudo venirse abajo por un desconocimiento del mundo docente y de la Administración. En Educación no puedes imponer, sino consensuar, y creo que eso él lo desconocía.

Aunque también hubo conflicto de intereses con su Fundación (Fundación Promete)...

—El programa Escuela Abierta para el que se contrató a su Fundación se ha interrumpido. No obstante, hay personas en esa Fundación que son aceptables y que, de hecho, mantengo en mi equipo.

Pasemos a lo que nos ocupa. ¿Cómo se está gestionando la Educación en el contexto de la Covid?

—Aquí partimos del principio de que hasta los 14 años la presencialidad es clave para desarrollar las competencias sociales y emocionales. Por ello, hemos adoptado medidas: grupos burbuja, generalización de la mascarilla, regulación de recreos, entradas y salidas... Hasta ahora, solo hemos registrado nueve contagios [9 de septiembre], de los cuales ninguno ha tenido su origen en el centro.

En estos casos, ¿cuál es el protocolo?

—En Infantil, enviamos a los alumnos diez días a casa porque, al ser grupos burbuja, no cumplen del todo las distancias. En Primaria, aislamos al contagiado, el mismo día mandamos a casa al resto del grupo y al siguiente les hacemos PCR. Si son negativas, vuelven a clase al tercer día. A partir de sexto, enviamos al coordinador Covid una batería de preguntas que formulará al alumno que ha dado positivo para conocer cuáles han sido sus contactos estrechos.

Veo que apuestan por la presencialidad, pero ¿cómo es compatible con garantizar la distancia?

—Nos lo facilita la caída de la natalidad en la última década. En Primaria, de los 950 grupos que hay, no llegan a 20 los que superan los 25 alumnos. Además, destinaremos los fondos del Ministerio a contratar a 220 maestros y los ayuntamientos nos han facilitado instalaciones.

Con la llegada del invierno, ¿la situación podría empeorar?

—No es descartable. Sin embargo, estamos viendo una línea clara: los brotes se producen 10 o 15 días después de las fiestas del pueblo —que no se han celebrado— y el 60% se da en menores de 20 años. Esto nos indica que falla el control externo de lo que hacen estos chicos lo que nos brinda una magnífica oportunidad para educar en valores. Por eso hemos preparado cursos para que los alumnos aprendan a respetar.

El dilema es seguridad vs. derecho a la Educación...

—No se trata de elegir sino de actuar según el conocimiento que tenemos del virus. Se puede buscar la forma para que, con un mínimo de seguridad, puedan ofrecerse el máximo de actividades. En las deportivas, por ejemplo, estamos estudiando con qué medidas podrían retomarse los campeonatos escolares.

Ya, pero el miedo es libre. ¿Qué diría a esos padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio?

—A los padres les hemos dado información para que sepan que el colegio es seguro. Y también les hemos recordado que están poniendo en juego el derecho a la Educación de sus hijos.

¿Y a los profes que se quejan porque se les pide ser enfermeros?

—A los maestros solo se les pide que llamen a las familias si detectan a alumnos con síntomas.

¿Han estimado el porcentaje de absentismo del alumnado?

—No llega al 6%.

¿Endurecería el protocolo si aumentase?

—Por el momento no vamos a sancionar, pero si vemos que hay familias que se niegan, tomaremos medidas más coercitivas. Donde sí nos preocupa el absentismo es en la población gitana.

En este clima, parece que se está avivando el ‘homeschooling’...

—Sí, pero dudo que pueda cumplir con la función social de la Educación que compensa desigualdades y contribuye a que el alumno desarrolle su potencial.

Sin llegar a tanto, ¿qué opina del modelo híbrido?

—Nosotros hemos ofrecido a los centros la posibilidad de implantar, en tercero y cuarto de ESO, la semipresencialidad según un modelo 3/2: una semana se asiste tres días y la otra, dos. Si la situación empeora, contemplamos hacerlo obligatorio también en Bachillerato. Y, en efecto, creo que tenemos una oportunidad para cambiar las cosas. Reducir la ratio es insuficiente y debe ir acompañado de un cambio metodológico.

¿A qué porcentaje de alumnos afectó la brecha digital y se quedaron descolgados durante el confinamiento?

—En torno al 30%. Algunos, porque no tenían internet; otros, porque los ERTE disminuyeron el poder adquisitivo de sus familias. En este sentido, admiro el esfuerzo que han hecho los maestros para que sus alumnos no abandonasen las clases.

Hubo una posición, liderada por el Ministerio, proclive al aprobado general y otra, como Madrid, más exigente. ¿Dónde está usted?

—Más en la primera. Yo siempre he defendido una evaluación centrada en el alumno y no tanto en la calificación. En esta línea, he trasladado a los centros que el punto de partida de este curso debe enlazar con el punto en el que se quedó el anterior y trabajar la recuperación emocional.

¿Qué objetivos se ha marcado para lo que resta de legislatura?

—Lo primero, recuperar el buen clima. Con la Concertada, por ejemplo, hemos flexibilizado el procedimiento para sustituciones por Covid, que se efectuarán de un día para otro, como en la Pública. También me gustaría rehacer la red de centros y la oferta, porque está sobredimensionada. Además, he creado la Dirección General de Innovación Educativa, desde la que pretendo potenciar la escuela rural y la competencia digital. Otro tema es la elevada tasa de interinidad, que reduciremos convocando oposiciones. Asimismo, estoy en contacto con la Universidad para revisar los Prácticum de los maestros... Lo que sí te puedo asegurar es que convicción e ilusión no me faltan.

El título de la ESO o Bachillerato no estará supeditado este curso a tener materias suspensas

La decisión de titular en ESO o Bachillerato se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones, señala el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

REDACCIÓN. Miércoles 30 de septiembre 2020

El **Real Decreto** aprobado con urgencia por el Gobierno prevé que este curso “la decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones”. “En todo caso –continúa el Real Decreto– para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia”.

Además, como el trimestre pasado, la repetición se considerará “una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato”.

En todo caso, el Gobierno señala que las administraciones educativas “podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del Bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados”.

Y los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, “podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Primaria, y de ESO, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato”.

Además, y con el objeto de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la LOE, tendrán carácter orientativo para los centros.

Desde el sindicato ANPE han denunciado la “dejación de funciones por parte del Ministerio”. “Es competencia del Estado –dice ANPE– la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución.

Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora”.

ANPE recuerda que la Lomce, y también las leyes anteriores, solo permiten promocionar de curso en ESO y Bachillerato con dos materias pendientes, siempre que no sean Lengua y Matemáticas y, excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias cuando estas sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, o en tres que no incluyan al mismo tiempo a las dos anteriores. Además, “es necesario que esos criterios sean comunes en todos los territorios, pues no olvidemos que los títulos académicos, que expide el Ministerio, tienen validez en todo el Estado”, añade el sindicato de profesores.

Para ANPE, “no se puede dejar al albur de las comunidades autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes”. “Si se mantiene esta redacción no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas”, añade.

ANPE añade a lo anterior el “mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado, que emana de la propia norma, en la que se recoge explícitamente que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas”.

Para ANPE, “buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia”.

Además, según esta organización, “el alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto”. “Aumentará aún más la brecha social y minimizará las posibilidades de la enseñanza pública como ‘ascensor social’ para los grupos de alumnos más desfavorecidos”, concluye.

CSIF ha ido más allá y ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por ocultar al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos. “Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad”, según CSIF.

Y exige que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas las leyes educativas, y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, lo que provocará más desigualdades. Además, ha recordado que el último informe PISA de la OCDE alerta sobre la escasez de personal docente, siendo esta la causa de una pérdida del rendimiento del alumnado y avisa sobre el déficit de infraestructuras y recursos tecnológicos en los centros. En España, según el PISA 2018 sobre **La organización escolar**, la percepción de los directores españoles sobre escasez de personal educativo es significativamente más alta que la media de países OCDE.

CSIF ha añadido que los servicios jurídicos del sindicato están analizando la posible impugnación del citado real decreto.

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado

La asociación Adimad, que engloba a los directores de secundaria de centros públicos, reclama a la Consejería de Educación una mayor inversión en equipamientos, contratación de personal docente y no docente así como la cobertura de las bajas que se están produciendo diariamente. «Estamos solos», asegura Esteban Álvarez, su presidente.

Pablo Gutiérrez de Álamo. 30/09/2020

La situación de los institutos públicos madrileños está cerca del colapso. Han comenzado el curso con las mismas fechas previstas al final del pasado, con cambios de criterio a dos semanas de comenzar y sin los instrumentos prometidos por la Administración educativa.

En su momento, Educación aseguró que enviaría 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras a los centros para poder llevar a cabo la enseñanza semipresencial que está en marcha desde 3º de ESO hasta el bachillerato.

También, que se mejoraría la conectividad para poder dar un buen servicio. No se ha hecho nada al respecto, que sepan en Adimad. Así de tajante se ha expresado Esteban Álvarez en la rueda de prensa que acaban de dar para hablar de las propuestas que ponen sobre la mesa.

Después de repasar qué ha ocurrido en los últimos meses, así como de denunciar que no se ha convocado a ninguna reunión a las y los directores para que pudieran plantear sus necesidades, Álvarez ha detallado cuáles son las peticiones, casi exigencias, que plantean desde la asociación.

Recursos

Madrid, como otras comunidades autónomas, vive una compleja situación por falta de personal en las listas de interinos. Este es el motivo para la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá la contratación de «docentes» sin titulación acreditativa. En cualquier caso, es una de las reivindicaciones de Adimad. La contratación de más personal para poder realizar con garantías la labor educativa en los centros.

A esta contratación, que supondría la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, se suma que hoy, por el vaciado de esas listas, no se están cubriendo con rapidez las bajas que se producen. Álvarez ha asegurado que, según sus datos (la Comunidad, ya sea vía Educación o Sanidad, no los facilita) de media, en cada instituto hay entre tres y cuatro docentes de baja o confinados por causa de la COVID. Cifras a las que hay que sumar el profesorado que está de baja por otras razones. Para apoyar el argumento, Ángeles González, también directora en Madrid, aseguraba que en su instituto hay diez docentes de baja actualmente.

Pero no solo se trata de personal docente, también es necesario un refuerzo del de administración y servicios, grupo en el cual también se están produciendo bajas que no se cubren. A esto, se suma el personal de limpieza, contratado por terceras empresas y que tampoco se cubre con la celeridad necesaria para mantener los centros educativos cercanos a un funcionamiento normal.

Más allá de la falta de recursos humanos está la falta de equipamiento tecnológico comprometido por la Consejería. 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras para intentar asegurar que la semipresencialidad del alumnado más mayor de secundaria y bachillerato fuera efectiva. A día de hoy, no han llegado esos equipos a los centros educativos. Sobrevuela a esto la pregunta de en qué se está invirtiendo el dinero enviado por el Gobierno central de los fondos Covid (cerca de 300 millones para Madrid). Tampoco la mejora de la conectividad en los centros. Asegura Álvarez que están prestando todo el material que pueden, pero no pueden prestar todo el que tienen porque, al mismo tiempo, hay que utilizarlo en el instituto para mantener la semipresencialidad.

Adimad denuncia que se han visto obligados a «competir» unos centros con otros en los últimos meses. Primero, por la compra de material higiénico-sanitario como geles hidroalcohólicos, mascarillas y demás. Ahora, por conseguir al mejor precio posible, equipamiento informático. Un equipamiento, asegura Esteban Álvarez, que no tiene casi **stock** en Europa y que ha visto sus precios aumentado por la presión de la demanda. Una demanda que ahora está intentando realizar las compras directamente en países como China.

Incomunicación con Salud Pública

A los problemas de infraestructuras materiales y humanas, viene a sumarse la incertidumbre en la que se están moviendo los centros. Están obligados a estar en contacto con la Dirección General de Salud Pública para informar de los casos que se estén produciendo y esperar a las instrucciones que les den, principalmente, sobre el cierre de aulas y el confinamiento de alumnado y profesorado. Desde hace días, no pueden contactar vía telefónica con dicha Dirección General. Cuando lo hacen por correo electrónico, no se garantiza que haya respuesta, y de haberla, tarde cinco o seis días, ha explicado el presidente de Adimad. Todo esto contando que la figura del coordinador COVID, una persona del equipo directivo, ha pasado a ser literalmente, un rastreador de casos y contactos directos y estrechos.

Tampoco saben qué hacer cuando un docente, por ejemplo, tiene casos positivos cercanos pero de fuera del ambiente laboral. ¿Ha de guardar cuarentena? ¿Ha de comunicarlo a alguien? Según las informaciones publicadas en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo a no ser que sea, principalmente, una persona conviviente. Alumnado y profesorado no lo son.

Son 2.000 los centros públicos que deberían estar en comunicación con Salud Pública. Según las estimaciones de la asociación de directores, además de los cuatro o cinco docentes que en cada centro se están dando de baja por motivos relacionados con la COVID, hay que sumar los casos entre el alumnado. En las primeras semanas, aseguran desde Adimad, había uno o dos diarios. Ya están entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que la incidencia del virus es desigual dependiendo de dónde esté el centro educativo.

Álvarez, además, ha explicado la dificultad de hacer este seguimiento en los institutos, en donde no existen los grupos estables de convivencia y hay materias en las que se juntan alumnos de diferentes clases. La optatividad de los cursos más altos incide negativamente en la posibilidad de controlar los contactos interpersonales. Aún así, asegura que los centros están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias que se les han dado. Aunque hay momentos, como los recreos, en los que se hace realmente complicado.

Discriminación

Otro de los problemas que denuncian desde Adimad es el hecho de que después de que la Comunidad de Madrid haya prohibido a los centros educativos públicos realizar obras de acondicionamiento que permitiesen, en la medida de lo posible, albergar a todo el alumnado en las aulas, hace unos días recibieron una

comunicación en la que la Administración daba permiso a los centros de secundaria para que pasaran a una presencialidad total en todos los cursos.

Desde Adimad entienden que este cambio de criterios, de la semipresencialidad a la posibilidad de presencialidad total, deja a la pública en desventaja frente a la concertada, que ha podido realizar ese acondicionamiento de los centros educativos así como la contratación de personal docente para el desdoble de grupos y la bajada de ratios.

Los públicos, ahora, no pueden acometer obras, aunque sí, aseguran, han acondicionado todos los espacios posibles para dar cabida a los desdobles. Tampoco pueden contratar personal ya es que es responsabilidad de la Consejería y, por último, no ha sido posible la idea de contar con espacios municipales a los que trasladar al alumnado desde los centros como también se planteó en algún momento.

Una situación que, además, se extiende a la prohibición expresa de que las y los docentes madrileños utilicen otra plataforma que no sea Educamadrid. «Ha mejorado, es verdad», aseguraba Álvarez a los medios. Pero no es suficiente. «Necesitamos convenios con las plataformas educativas para usarlas si son adecuadas», insistía. El presidente de Adimad recordaba cómo en otras comunidades autónomas se ha hecho precisamente esto. «No entendemos por qué aquí no».

ESCUELA

Poner en valor la labor de los docentes EDITORIAL

La adaptación y digitalización de las aulas en tiempo récord no ha sido de manera homogénea en todos los colegios e institutos españoles. El principal hándicap es la formación a los docentes. La tecnología por sí sola no implica cambios si no hay una labor formativa que acompañe esa puesta a punto de toda la comunidad educativa. Una formación que de reforzar dos aspectos clave en estos momentos: la educación para la era de la digitalización y la promoción de la equidad y atención a la diversidad del alumnado.

Hoy, sólo el 38% de los profesores de secundaria ha recibido formación en tecnologías de la información (TIC) en su educación formal. En el caso de los docentes de primaria, ese porcentaje asciende ligeramente al 49%. Así aparece reflejado en el informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2020, de las fundaciones Sociedad y Educación y Ramón Areces.

La falta de formación no es la única dificultad en relación con la tecnología que han sufrido los docentes durante los meses de confinamiento. También han tenido problemas tecnológicos para desarrollar su labor docente a distancia por lo que han tenido que utilizar sus propios recursos tecnológicos para realizar su labor, como por ejemplo el ordenador o la conexión a Internet.

Los problemas tecnológicos no solo afectan a los docentes. El alumnado no es ajeno. Y en esta nueva normalidad, para estudiantes y profesores las cargas de trabajo también se incrementarán, en comparación con la docencia presencial, destacando también la mayor burocracia a la que están sometidos.

Lo que está claro es que el sistema educativo debe poner en valor, aún más, el papel de los docentes y su adaptación a la situación actual, con medios tecnológicos y materiales y la formación para desarrollar su labor con calidad, equidad e inclusividad.

El Gobierno notifica un 5% de colegios afectados por el coronavirus

Los cierres de centros y aulas por la pandemia de Covid-19 afectan a la actividad lectiva de más de 40.000 alumnos en España mientras el Ejecutivo rebaja la duración de las cuarentenas

Daniel Martín

La que para muchas comunidades autónomas es la quinta semana lectiva se está produciendo con nuevos sobresaltos debido a los casos y brotes de coronavirus, que están obligando a cerrar algunos centros educativos y a imponer cuarentenas a numerosas clases, al igual que venía sucediendo las semanas anteriores. En total, hay más de 40.000 alumnos afectados en toda España, aunque no hay una cifra oficial actualizada. El Ministerio de Educación y Formación Profesional reconocía la semana pasada que un 5% de los colegios e institutos españoles se había visto afectado desde el inicio del curso por incidencias relacionadas con la pandemia, de la que nuestro país es el principal afectado en la Unión Europea y uno de los que peores cifras mantiene a nivel global. La segunda ola se está produciendo a la par que el inicio escolar y la relación entre la apertura de las aulas y la expansión de la Covid-19 está en sospecha.

Aunque correlación no implica causalidad, un ejemplo paradigmático de este camino paralelo entre incidencia del virus y apertura de centros escolares es la Comunidad Foral de Navarra. La región fue la primera en incorporar a los centros a alumnos de todas las etapas educativas y actualmente es la comunidad autónoma con una mayor tasa de contagios, solo por debajo de la Comunidad de Madrid. La tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por 100.000 habitantes) es de 683 en Navarra y de 775 en Madrid, muy por encima del resto de comunidades autónomas, que oscilan entre los aproximadamente 101 de la Comunidad Valenciana y los 448 de La Rioja, según los datos del informe actualizado el pasado martes de situación de la pandemia de coronavirus en España, elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Como consta en el informe de datos recabados por el centro dirigido por el epidemiólogo Fernando Simón, el pico de la segunda ola hasta la fecha en Navarra se produce justo dos semanas después del inicio del curso en la comunidad foral, a primeros de septiembre, lo que podría apuntar de nuevo hacia una relación entre ambos indicadores. Estas cifras de contagiados también se traducen en aulas en cuarentena. Así, según la actualización de datos de este indicador que elabora diariamente el periodista de EsRadio Luis del Pino, la Comunidad Foral tenía el pasado martes un total de 112 aulas cerradas, con más de 2.000 alumnos en cuarentena. Su estimación elevaba hasta las 832 las clases cuarentenadas en Madrid, con casi 14.000 alumnos en cuarentena. Según este sumatorio, basado en noticias y fuentes oficiales autonómicas, las aulas cerradas por casos y brotes de coronavirus en España estaría cerca de las 4.000, siendo más de 47.000 los estudiantes afectados y hasta 359 los docentes. Asimismo, habría 18 centros completamente cerrados debido a la pandemia.

Estas cifras, en todo caso, varían cada día, y es muy difícil establecer una imagen fija, habida cuenta de que la información llega con cuentagotas por parte de las administraciones autonómicas y, hasta la fecha, el Gobierno central solamente ha proporcionado unas cifras actualizadas bajo los mismos parámetros una vez. De esta manera, por ejemplo, la cifra de EsRadio de 207 aulas cuarentenadas en Aragón, el mismo martes quedaba desfasada en poco tiempo, ascendiendo las aulas afectadas en 28, hasta las 223 —un 1,5% del total de clases—, según informó el departamento regional de Salud Pública, que especificó que los centros afectados eran 24.

En Cataluña sucedía tres cuartos de lo mismo. Si en la estimación diaria de Del Pino la cifra de aulas en cuarentena el pasado día 29 era de 1.063, al poco tiempo el número subía un 24%, hasta las 1.144, según informó el Departament d'Educació de la Generalitat. Los cierres de aulas afectaban a grupos de 737 centros educativos, aunque solo permanecían cerrados al completo un par de ellos. Los confinamientos en ese momento, informaba el gobierno catalán, afectaban a un total de 24.437 alumnos y 1.561 docentes y personal de administración y servicios, así como a 242 miembros de personal externo. En Cataluña, según el sindicato CCOO, en el 74,4% de las aulas de los centros no puede guardarse la distancia de seguridad, lo que podría apuntar hacia este factor como el principal culpable del cierre de centros y aulas en cuarentena.

La lista de nuevos casos suma y sigue en muchas de las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, Andalucía informaba el miércoles de que el 91,9% de los centros educativos andaluces está libre de coronavirus. La comunidad andaluza contabilizaba 10 cierres totales de un total de 7.099 centros y 559 aulas en cuarentena —un centenar más de las que había un día antes, según Del Pino—, de un total de 78.024, el 0,71%. Además anunciaba que se habían producido 69 reaperturas de clases.

Aunque ya algo desfasadas, las cifras oficiales de clases cuarentenadas en España caían hasta menos de 3.000. En concreto, el pasado 24 de septiembre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional hacía público que le constaban 2.852 grupos en cuarentena, de un total de 386.214 que hay en total en nuestro país durante este curso 2020/2021. «Más de 8 millones de estudiantes no universitarios y más de 700.000 docentes han regresado a las aulas en más de 30.000 centros educativos. Durante estas primeras semanas, se han registrado incidencias en menos del 5% de los centros y, a día de hoy, más del 99% de los grupos funciona con normalidad», destacaba en una nota de prensa el departamento dirigido por la ministra Isabel Celaá, después de una reunión interministerial con el departamento de Sanidad, liderado por Salvador Illa.

Andalucía informaba el miércoles de que el 91,9% de los centros educativos andaluces está libre de coronavirus

Responsables de ambas carteras se reunieron con los consejeros autonómicos para hacer un seguimiento de la situación en los colegios. De estos encuentros se recabaron unos datos que arrojaban que el 95,5% de los centros no ha registrado ninguna incidencia durante el inicio del curso y que en ese momento el 99,3% de los grupos estaba «funcionando con normalidad».

Estas cifras parecerán muchas o pocas según con qué país se compare. Por poner algunos ejemplos, en Francia, otro de los países con peores datos de coronavirus a nivel europeo, la tasa de aulas cerradas es de solo el 0,02%, con 19 centros escolares cerrados, de un total de 60.000, y 1.152 clases cuarentenadas, de un total de 528.000. Asimismo, hay 5.612 alumnos y 1.153 docentes contagiados. En el Reino Unido, el porcentaje de aulas cuarentenadas, era del 4% la semana pasada y ya ha subido hasta el 6% durante esta. La Asociación de Profesores Alemanes estima que, por su parte, en el país germano hay alrededor de 700 escuelas afectadas por cierres o aulas en cuarentena. Italia, que dio inicio al comienzo del curso a mediados de septiembre, dos semanas después más de 70 centros fueron cerrados y más de 400 grupos fueron puestos en cuarentena. En Rusia, país más afectado por la pandemia en Europa en número generales, su capital, Moscú,

ha ordenado este mismo martes cerrar colegios y escuelas durante dos semanas, después de haber duplicado el número de casos en la ciudad durante los últimos siete días, por citar otro país de nuestro entorno.

En España, lejos de decantarse por medidas de este tipo, lo que se ha hecho es minimizar el impacto de las cuarentenas y los cierres estableciendo que estos sean menos prolongados. Así se desprende de la Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos, que fue modificada el pasado 24 de septiembre, según adelantó El Mundo. El documento introdujo dos cambios: unas medidas de cuarentena de 10 días en vez de 14 —como ya modificó el Ministerio de Sanidad para el resto de ámbitos—, para alumnos y docentes, y una definición de «contacto estrecho» que limita los cierres de aulas, ahora establecidos con tan solo un caso positivo en el aula en muchas de las comunidades autónomas.

Las modificaciones contenidas en esta guía apuntan ahora a que si se pertenece a un grupo de convivencia estable, los denominados grupos burbuja, se consideran contactos estrechos todos los miembros de esa burbuja, pero si la clase no está organizada de esa manera, solo serán considerados estrechos los contactos que hayan estado a una distancia de menos de dos metros durante más de 15 minutos y sin un «uso adecuado» de la mascarilla. «La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable Covid-19 en el centro», señala la guía, que también indica que «se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla». Asimismo, quedan encuadrados dentro de esta definición «los convivientes de los casos confirmados» y «cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia de menos de dos metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos».

Pese a que, como vemos, se siguen cortando flecos en cuanto a los protocolos destinados a un desarrollo del curso escolar con los menos incidentes posibles, la ministra Celaá señalaba al término de la reunión con las consejerías del ramo y con Illa que «este inicio de curso es una demostración de que las medidas que acordamos y en las que llevamos trabajando estos meses están funcionando». Celaá restaba importancia al número de incidencias, pero, eso sí, reconocía «el gran esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los docentes», a la vez que insistía en «los beneficios de la educación presencial».

Para Celaá las cifras demuestran que las medidas están funcionando ya que a pesar de las incidencias registradas el porcentaje de incidencia es bajo

«Estamos muy a favor de la presencialidad, los beneficios son insustituibles, nos apoyamos en la educación online para acompañar la tarea educativa cuando no podemos disfrutar de la presencialidad pero el objetivo es conseguir la presencialidad al 100% y a medida que podamos doblegar la curva de la pandemia iremos en esa dirección», abundó en una rueda de prensa posterior a la reunión. En la misma, la ministra reiteró la idea del ejecutivo de no cerrar las aulas a menos que sea el último recurso. «De ninguna manera contemplamos un confinamiento total al modo de marzo», señaló la ministra, que llamó a la calma ante las quejas de buena parte de la comunidad educativa respecto al desarrollo del inicio del curso escolar. «En absoluto coincidimos con que la situación sea caótica, todo lo contrario, las 17 comunidades autónomas han tipificado como muy satisfactoria, dentro de la excepcionalidad de la pandemia, pero estamos hablando de un confinamiento del 0,73% del total de aulas, afectadas que no infectadas». A este respecto, apuntó a que tanto el Gobierno como las autonomías tienen la «determinación compartida de mantener los centros educativos abiertos». Y es que, para la ministra, «los centros educativos son lugares de detección precoz, son los lugares más seguros, no son lugares de contagio, hay que tener mucho cuidado a la salida y en las actividades sociales», afirmó Celaá, según lo que han reportado las comunidades autónomas. De estas, según la titular de Educación, tres de las 17 tenían más de un 1% confinado, mientras que en el resto el porcentaje era inferior, sin especificar cuáles eran.

Illa sobre la vuelta a las aulas: «De momento esto no está yendo mal»

Celaá se vio respaldada en su argumento por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien aseguró que «De momento esto no está yendo mal, lo de la vuelta a la educación presencial». Respecto a las familias, el ministro señaló que «en su inmensa mayoría están teniendo un comportamiento ejemplar y un compromiso cívico en el cumplimiento de las cuarentenas y aislamientos para proteger su salud y la de todos».

«Como era esperado, se están produciendo casos pero las medidas para detectarlos y controlarlos se están aplicando bien, según nos trasladan las CCAA», añadió Illa, quien destacó, junto a Celaá, algunas de ellas, como la adaptación de las pruebas de acceso a la universidad en este curso 2020-2021, que se aplicará también a las prácticas de Formación Profesional con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT) al mínimo establecido en la ley, fijado en 220 horas. Asimismo, pusieron énfasis en la última medida para tratar de paliar las elevadas ratios y la alta densidad de las clases, la de eliminar el requisito para la contratación de docentes de contar con el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas. «De este modo, se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no hayan cursado este

máster pero que cumplan todos los demás requisitos, siempre y cuando se agoten las listas de personas aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo», especifican desde el Gobierno en un comunicado de prensa.

Desde el Ejecutivo añaden que la comisión de seguimiento de la Covid-19, creada por el Ministerio de Educación y FP en agosto, «continúa trabajando en la recogida de datos de información para establecer una visión global de la situación y adoptar las medidas oportunas». Al respecto, concretan que se ha trasladado un formulario a las comunidades autónomas para recopilar información «de una manera sistemática y precisa», para que tanto las administraciones educativas españolas como la Unión Europea dispongan de ella, si bien, hasta la fecha el departamento que dirige Celaá solo ha proporcionado los datos de incidencias en centros educativos en esa ocasión, por ahora.

Los datos de España no permitirían abrir los centros educativos según la Universidad de Harvard

Unas medidas que pretenden rebajar los resultados negativos de una vuelta a las aulas con más incidencias que en muchos de los países europeos. En Estados Unidos, país donde la mayor parte de estados han apostado por la vía telemática, el Harvard Global Health establece una serie de parámetros que establecen en qué condiciones se tendría que cerrar las aulas para atajar la pandemia de coronavirus. En concreto, habla de un porcentaje de más del 5% de población contagiada para hacer cierres parciales o totales. Según estos indicadores, la mayoría de regiones de España debería clausurar en mayor o menor medida los centros educativos. Solo podrían permanecer todos los centros abiertos en todas las etapas en las comunidades autónomas de Asturias y en las Islas Canarias.

El Gobierno elimina el requisito del Máster de Secundaria y rebaja la exigencia académica excepcionalmente

Mar Lupión

La crisis sanitaria por el COVID-19 está forzando a las administraciones a tomar medidas excepcionales y de emergencia. El educativo es uno de los sectores que lo está viviendo en sus propias carnes. Unas de las últimas decisiones anunciadas por el gobierno y que más polémica han suscitado es la de flexibilizar «de manera excepcional y limitada hasta que concluya el presente curso académico» los requisitos para el ejercicio de la docencia. Concretamente, se refiere al máster que proporciona y acredita la formación didáctica necesaria para ejercer como docente en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas. Esto se traduce en que se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no estén en posesión de dicho título, siempre y cuando se agoten las listas de candidatos en régimen de interinidad y la de demandantes de empleo. Esta iniciativa responde a una petición de las comunidades autónomas, que han planteado al Ministerio las dificultades que se están encontrando a la hora de incorporar profesorado que cubra las contrataciones previstas.

El anuncio ha provocado reacciones inmediatas y, en muchos casos, negativas. La Conferencia Nacional de decanas y decanos de Educación ha expresado su postura de «rechazo y perplejidad». Consideran que se trata de una «agresión directa a la profesión docente, a los cientos de miles de titulados y estudiantes del Máster de Secundaria y a las universidades de este país como responsables de la formación inicial del profesorado». Insisten en que esta decisión rompe con los compromisos de la administración para mejorar la profesión docente y va en contra de los titulados que, en los últimos años, no han podido trabajar como docentes o lo han hecho en condiciones precarias por la falta de oferta pública de empleo y la tasa de reposición cero.

Además, recurren a las cifras para intentar desmotar la justificación de las comunidades autónomas: según datos del ministerio, cada curso se titula en torno a 30.800 profesores de secundaria. Entre 2015 y 2019, tenemos un total de 114.799 nuevos titulados. Desde la implantación del Máster, 200.000 personas lo han obtenido. Por tanto, creen que «no hay razón alguna que justifique el argumento en el que se apoya la decisión de que no encuentran profesorado que cubra las contrataciones que han previsto. La falta de previsión de las comunidades no puede resolverse con medidas que devalúen la profesión docente y ponen en riesgo el derecho fundamental a recibir una educación segura y de calidad».

La Conferencia de Decanas y Decanos de Educación ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus peticiones más antiguas: la de que se pongan en marcha medidas para mejorar la formación y consideración social del profesorado «manteniendo una interlocución directa y continuada con el ministerio, las comunidades autónomas, asociaciones de docentes y movimientos de renovación pedagógica».

Los sindicatos se oponen y piden que sea algo temporal

CSIF ha sido una de las organizaciones sindicales más duras en su rechazo a lo anunciado por el ministerio. Mario Gutiérrez Gutiérrez, presidente del sector nacional de CSIF Educación, nos explica que, para ellos «es una manera de despreciar o disminuir la función pedagógica de la enseñanza. Enseñar no es solo transmitir conocimientos. Si esto fuera así y lo redujéramos al absurdo un alumno de Bachillerato podría ser maestro. Hay herramientas pedagógicas necesarias y en eso consiste el Máster, en adquirir competencias que un profesor de Secundaria graduado no posee puesto que no están presentes en la carrera».

Desde UGT, Maribel Loranca, secretaria del sector de enseñanza, señala que para ellos «tiene que ser una medida absolutamente excepcional, circunscrita a los casos absolutamente imprescindibles, porque estamos

viviendo circunstancias excepcionales». Apunta, además, a que el ministerio tendrá que arbitrar «un cambio en la normativa que permita que se hagan convocatorias extraordinarias con las que cubrir determinadas plazas y determinadas especialidades. De momento no hemos obtenido respuesta del ministerio a esta cuestión». Por otro lado, señala que, de acuerdo con los datos que maneja el sindicato, «posiblemente esta carencia de candidatos ocurre en las especialidades de Formación Profesional, aunque en algunas comunidades están teniendo problemas también en especialidades más generales, como Matemáticas e Historia».

Ramón Izquierdo, secretario de política sindical de ANPE, nos dice que «podemos aceptarlo como medida excepcional. Es decir, en aquellas especialidades concretas en las que no se tenga a ningún especialista con la titulación concordante que se necesita y en posesión del Máster. Si no, la alternativa sería dejar sin profesor a algunas aulas y más en un momento como el actual, donde todo es más complejo. Claro está, que no se puedan integrar en ninguna lista ni bolsa de interinos hasta que no cumplan con el requisito del Máster. Que se priorice, por supuesto, a los que si lo tienen».

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Para CSIF, se trata de «una falta de planificación absoluta por parte de las comunidades y el gobierno central. En 2018 avisamos de que había muchas materias que se habían quedado sin cubrir en las propias oposiciones, por falta de graduados universitarios. Evidentemente tiene que ver con una falta de planificación universitaria y con una mala planificación de la carrera docente, que no resulta lo suficientemente atractiva como para atraer a los mejores profesionales a la educación». Un extremo con el que coinciden en ANPE: «venimos pidiendo desde hace ya tiempo que se elabore una ley de la profesión docente en el ámbito público con unos requisitos de acceso mínimos y que en el apartado de la función pública sea una carrera profesional atractiva. Tenemos que conseguir que los graduados universitarios se decanten por la enseñanza no universitaria. Esto es una asignatura pendiente, que haya más demanda».

Apuntan, directamente, a la precariedad de muchas de las ofertas como una de las razones por las cuales los candidatos las rechazan. «Hablamos de unas condiciones absolutamente pésimas, se ofertan jornadas a un tercio, medias jornadas, etcétera. Se les llena la boca a las administraciones educativas hablando del número de profesores que han contratado, pero, si tradujéramos esa cifra a jornadas completas, habría que ver», defiende Loranca, que añade que «son ofertas que pueden conllevar incluso un cambio de residencia y, además, la seguridad o el horizonte laboral que se les marca, en muchos casos, es el hasta el 22 de diciembre y después **ya veremos**». Gutiérrez coincide y reflexiona: «si hay profesionales que tienen potencial y posibilidad de trabajar en la empresa privada y les ofreces plazas de este tipo, es complicado que se sientan atraídos».

Otro de los motivos, la falta de oferta de empleo público en 2019. Izquierdo dice que «se han retrasado las oposiciones del año pasado y esto ha hecho que miles de funcionarios en prácticas, a un paso de ser de carrera, que podrían haber estado ya en el sistema, aún no han accedido a él. Se ha acabado llamando a interinos para cubrir el aumento de plantillas para los desdobles, por ejemplo». Y en UGT recuerdan que «hay un número de graduados con el Máster de Secundaria que no están en lista de interinos porque no se han celebrado las oposiciones. Cuando se conformen esas listas, ellos tienen que tener preferencia».

La calidad educativa en juego

Hay otra cuestión en el aire, además desprestigio de la profesión docente que, para muchos, supone esta medida: la preocupación de que decisiones de este tipo tengan un impacto negativo en la calidad de la educación. Ainara Zubillaga es experta en educación e innovación de la Fundación COTEC y valora «muy negativamente» lo anunciado. Nos asegura que «va absolutamente en contra de todas las acciones y mensajes que se han intentado lanzar en los últimos años y que decían que era importante reforzar la dimensión pedagógica de la profesión docente. No olvidemos que enseñar no es transmitir un contenido de una disciplina y el hecho de permitir el acceso de gente que no tiene esa mínima formación pedagógica supone tirar por la borda un camino que ha costado mucho construir».

Sobre cómo puede afectar esta medida y otras a la educación española, subraya que «la calidad, evidentemente, va a peor. Si tú eliminas la formación pedagógica de los profesores de secundaria, eso va a notarse en la calidad y más en una situación escolar complicada como esta. Es indudable». Zubillaga intenta extraer algo positivo de lo que está pasando y destaca el papel de los centros educativos: «hay una brecha entre lo que está sucediendo en la práctica, en los centros y lo que ocurre en la administración en general. Creo que los centros están liderando de manera clara la transformación. Se han visto en una situación que los ha desbordado y ha respondido en su gran mayoría. Creo que la administración no termina de encontrar el hueco y de dar respuestas acordes a la gravedad del momento que generen una sensación de respaldo en docentes y direcciones». Defiende que la medida de supresión temporal del requisito del Máster «ha puesto de manifiesto que cuando algo es necesario, se pueden articular formas de excepción regulatoria. Lo que ocurre es que esta excepción va en un sentido negativo, pero demuestra que, si es necesario, se puede hacer. Quizá hay otras situaciones, por ejemplo, vinculadas al aumento de la autonomía de los centros, en las que se podría explorar. Ya no vale el **no se puede** o **la Ley no lo permite**. Resulta que, si alguien quiere, la ley se cambia».

Hay expertos que ya hablan de una «generación COVID» de jóvenes que se verán afectados por estas situaciones tan extremas. Para Zubillaga «el problema no es la etiqueta sino lo que signifique, si es en términos positivos o negativos. Lo vivido y lo que queda por vivir va a afectar, la generación va a estar marcada de alguna manera. La connotación positiva o negativa dependerá de lo que hagamos ahora».

La pandemia provoca el auge de los barracones, las aulas prefabricadas

La obligación de distanciamiento social fuerza a las comunidades a instalar en los centros educativos más de 400 de estas peculiares clases

Daniel Martín

Con la expansión de la pandemia de la Covid-19, los anteriormente denostados barracones se han convertido en la tabla de salvación para muchos centros educativos. La mayoría de las comunidades autónomas están apostando por la instalación de aulas prefabricadas para fomentar el distanciamiento social entre alumnos al poder desdoblar grupos más fácilmente. A falta de datos oficiales para este curso, al inicio del pasado unos 50.000 alumnos acudían a este tipo de infraestructuras para recibir las clases en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y, en menor medida, en Islas Baleares, Islas Canarias, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Según el recuento elaborado por Periódico Escuela, se estima que este curso habrá al menos 422 aulas prefabricadas nuevas, lo que a una media de 20 alumnos por clase, resultaría en unos 8.500 alumnos más que el curso anterior.

Esta estimación elevaría hasta los casi 60.000 el número de alumnos estudiando actualmente en barracones, principalmente en las etapas de Infantil y de Primaria. No obstante, algunos de los alumnos que empezaron el pasado curso estudiando en estos módulos este año ya han sido reubicados, por lo que es muy difícil establecer una cifra exacta sobre este fenómeno. Mientras que tradicionalmente el uso de estas construcciones estaba en el punto de mira de los sindicatos y de muchos partidos políticos (sobre todo porque muchas veces su temporalidad se acababa alargando durante años e incluso décadas) ahora buena parte de la comunidad educativa las reclaman para hacer de los centros lugares más seguros.

«Tradicionalmente el uso de estas construcciones estaba en el punto de mira de los sindicatos y de muchos partidos políticos porque su uso se prolongaba durante años»

Muchas de las fuerzas sindicales denuncian que este curso las medidas llegan tarde y que la instalación de los módulos se está demorando en el tiempo y no han estado listos para el inicio del curso en algunos casos, aunque la peculiaridad de cada comunidad autónoma se hace palpable en lo que se refiere a este tema, con políticas y situaciones de partida de lo más variopinto.

Andalucía suma 40 unidades a un conjunto de módulos que acogen 11.000 alumnos

La Junta de Andalucía ha sido una de las que se ha hecho con más módulos para poder sumar nuevas aulas, hasta un total de 40, que podrían aumentar más adelante. La región ya era una de las que más alumnos alojaba en estos módulos, unos 11.000 estudiantes, lo que fue calificado por el actual presidente autonómico, José Manuel Moreno Bonilla, cuando estaba en la oposición, como «chabolismo escolar».

Los estudiantes andaluces en estas condiciones están repartidos en 240 edificios prefabricados con 450 aulas. De estos 240 edificios, 36 superan los 20 años de uso y otros 28 se acercan a esta antigüedad. El pasado mes de agosto, la Agencia Pública Andaluza de Educación licitó un contrato por un valor estimado de 4,2 millones de euros sin IVA mediante un negociado sin publicidad. «El cada vez más alarmante escenario sanitario de rebrotes de COVID-19 en todo el territorio nacional, incluso en centros con programas de refuerzo escolar en nuestra comunidad autónoma, convierte estas necesidades en absolutamente críticas y de imperiosa urgencia, cuya satisfacción no puede posponerse en ningún modo a los plazos de resolución de los procedimientos abiertos, incluidos los de urgencia, dado que estos edificios modulares prefabricados deben proporcionar de manera inmediata los nuevos espacios docentes para el necesario distanciamiento social por motivo de la lucha y prevención del contagio del Covid-19», argumentaba al respecto la Junta de Andalucía en el expediente de contratación.

Retrasos en la instalación de algunas aulas prefabricadas en Aragón

En Aragón, la secretaria general técnica del Departamento de Educación, Estela Ferrer, anunció hace unos días que se duplicaban los barracones en la comunidad autónoma. En una intervención realizada a propuesta de PP y de Cs, la secretaria general técnica no señaló cuántas estaba previsto instalar ni las que finalmente se estaban terminando de colocar, aunque detalló que esta previsión al alza, «en aras de la seguridad», ha sido uno de los motivos del retraso en la entrega de estas instalaciones.

Citó el ejemplo de los alumnos del Soledad Puértolas, en Zaragoza, que pudieron dar clase en estas aulas prefabricadas dos semanas después del inicio del curso. En este centro estaba previsto colocar cuatro aulas prefabricadas y finalmente fueron seis más, 10. En otro centro, en el Parque Venecia, se ha pasado de cuatro a ocho aulas. Ferrer señaló que se habían incorporado otras medidas de seguridad en las aulas, sobre todo relativas a la ventilación. «Había que priorizar que se dispusiera de espacios suficientes para las medidas frente al virus. Es uno de los motivos del retraso de la instalación de estas aulas en algunos colegios», señaló Ferrer, que apuntó a que se doblaría el número de aulas prefabricadas, aunque sin aportar una cifra. La

instalación de los módulos está trayendo, sin embargo, problemas en los casos de algunos centros, sobre todo del sur de la ciudad de Zaragoza. Algo más de 100 niños de primaria del citado Soledad Puértolas empezaron de forma temporal el curso en espacios de otro centro, el colegio Valdespartera 3. Asimismo, otros 96 alumnos de 1º de Infantil del María Zambrano se reubicarán en el aulario de primaria del citado Parque Venecia. En total, ocho centenares de alumnos estudiaban en aulas prefabricadas en Aragón al inicio del año pasado, una cifra que ha aumentado este curso.

Castilla-La Mancha alquila casi medio centenar de nuevos módulos

No han trascendido novedades en cuanto a este tipo de construcciones en las comunidades de Asturias, Canarias —que con 1.540 alumnos en barracones es la quinta autonomía de España por número de alumnos en estas condiciones— y Cantabria, aunque sí en el caso de Castilla-La Mancha. Allí, para los desdobles de clases se están utilizando hasta 35 aulas prefabricadas adquiridas ya en la legislatura 2011-2015 y a estas se han sumado otros 48 módulos prefabricados que han sido alquilados por el gobierno que encabeza Emiliano García-Page, que mantiene actualmente a unos 800 alumnos estudiando en barracones.

Castilla y León descarta añadir aulas prefabricadas a la red de centros

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hace unas semanas que en el caso de que no hubiera espacios suficientes durante el desarrollo del curso, la primera medida que tomaría su gobierno sería la de establecer un turno de tarde, una iniciativa que se contempla sobre todo para Bachillerato. También aseguró que los problemas de los centros para redistribuir a los alumnos se analizarían uno a uno para encontrar la mejor solución y descartó, por el momento, utilizar espacios que no fueran educativos, así como la instalación de más aulas prefabricadas, una solución poco extendida en la región.

Cataluña incorpora 32 nuevos módulos y ya supera el millar

Cataluña, que es la comunidad autónoma donde un mayor número de alumnos estudian en barracones, aproximadamente unos 20.000, ha incorporado para este curso cinco nuevos espacios inmuebles y nuevas aulas prefabricadas. En concreto, añade a su red tres nuevos centros específicos de Formación Profesional por traslado de ciclos, además de un centro de nueva creación resultante de la fusión de dos escuelas. También tres centros concertados pasan a ser públicos y se crean 29 nuevos institutos escuela, con lo que habrá 83 en toda Cataluña, según informó el gobierno de la Generalitat. En cuanto a las aulas prefabricadas, se añaden 32 unidades, con lo que el conjunto de estos módulos pasará de 1.014 a 1.046 unidades.

La Comunidad de Madrid hace una apuesta fuerte por los barracones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba hace semanas en una entrevista en Antena 3 que «las aulas prefabricadas son una solución ideal» en la vuelta al cole, apostando fuerte por esta medida para tratar de reducir la concentración de alumnos en las instalaciones educativas. El titular de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, confirmaba este plan días después, cuando anunciaba que había proyectado una compra de 260 barracones con el objetivo de no superar la veintena de alumnos por clase. Estos módulos cuentan con ventilación natural, aislamiento térmico y acústico, condiciones por las que la Consejería de Educación garantiza que cumplen con «todos los estándares técnicos». Su vida útil es la misma que la de un aula convencional y el Ejecutivo autonómico ha comprado hasta 5.000 pupitres adicionales a los de su mobiliario para equiparlos. La región gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso ha invertido en total unos 35 millones de euros en nuevas instalaciones educativas, en un total de 550 actuaciones. En total, se ejecutarán 30 obras, de las que nueve corresponden a la construcción de nuevos centros y 21 a ampliaciones. Nueve de ellas se van a ejecutar en Madrid capital y las restantes 21 en diversas localidades de la región. Asimismo, dentro de este Plan, se construirán cuatro centros en una única fase y se culminará la construcción de otros diez, según informaron. Otra de las medidas de seguridad que se incorporarán a los centros serán las mamparas para los pupitres. En este sentido, la comunidad ha adquirido unas 60.000.

La Comunidad Valenciana descarta nuevos barracones, que el curso pasado albergaron a 12.000 alumnos

El conseller de Educación, Vicent Marzà, explicaba recientemente al respecto de las aulas prefabricadas que no le constaba que se hubieran instalado nuevos módulos y descartó nuevas adquisiciones, aunque en un primer momento el gobierno regional sí había anunciado que habría nuevos módulos. El consejero aseguró que cuando accedió al cargo encontró «más de 8.000 niños en centros íntegramente en barracones que, además, eran crónicos, y, de ellos, ahora 6.000 están en aulas dignas; el resto, unos 2.000 estudiantes que estaban en los barracones estructurales, corresponden a centros que están construyéndose o a punto de comenzar la construcción». Marzà se refiere a los 8 centros educativos que abren las puertas en 2020-21 con una inversión total de 27 millones. A lo largo del curso otros 6 estarán en construcción, con una dotación económica de 31,5 millones de euros. El pasado curso la Comunidad Valenciana arrancaba el curso con 12.000 alumnos en barracones, lo que la situaban, por detrás de Cataluña, como la segunda región con más estudiantes estudiando en estructuras de estas características.

Extremadura modera el uso de aulas prefabricadas

El gobierno extremeño no ha comunicado la instalación de nuevas aulas prefabricadas, aunque según publica la prensa local, un grupo de operarios instaló a comienzos de septiembre casetas prefabricadas en el interior del colegio Licenciados Reunidos, en la ciudad de Cáceres.

Islas Baleares suma 24 módulos

Galicia tampoco ha comunicado la instalación de barracones. No así en Baleares, donde la Conselleria d'Educació informó hace varias jornadas de la instalación de 24 aulas prefabricadas con el objetivo de limitar a una veintena los alumnos en las clases. Del total de 24 aulas de este tipo, 15 corresponden a Mallorca y 9 a Ibiza. En total, Baleares inicia el curso con 119 aulas modulares, sumando las nuevas y las que ya estaban instaladas de otros años. La comunidad autónoma insular, aunque lejos de otras regiones, era con 2.250 alumnos estudiando en barracones la cuarta de España por número total.

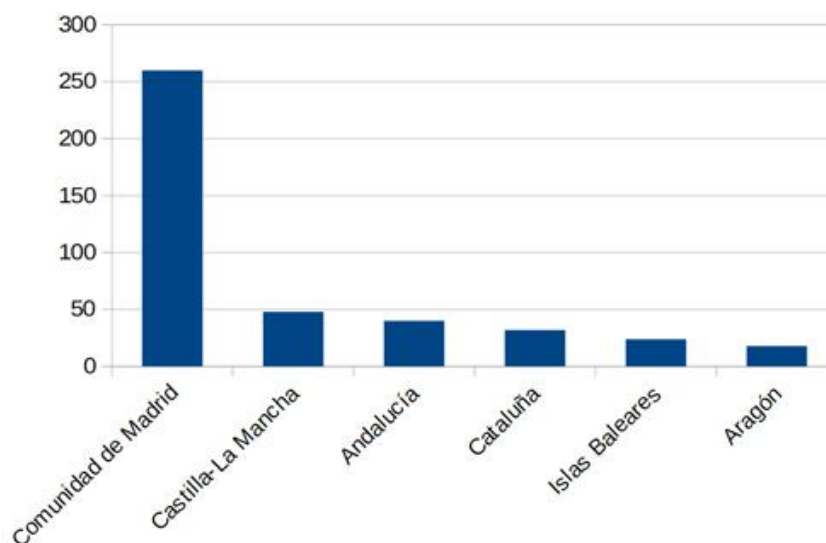
País Vasco no aumenta su número de barracones

Ni en La Rioja ni en Navarra ni en Murcia —con unos 800 alumnos estudiando en barracones—, por seguir con el orden alfabético en cuanto a las comunidades autónomas, han trascendido instalaciones de barracones. Sí lo ha hecho en el País Vasco. En esta comunidad autónoma el centro de Primaria Toki Alai ha solicitado por escrito al departamento de Educación la colocación de algún tipo de aulas prefabricadas que permitan dar una solución rápida y segura a sus alumnos, ante la dificultad de cumplir las medidas de distanciamiento en las actuales instalaciones del centro, y al haber albergado algunas clases de otros centros. El Ayuntamiento de Irún ha apoyado la instalación de aulas prefabricadas en el patio del colegio y se ha mostrado dispuesto a colaborar con el gobierno autonómico en los trabajos de colocación de estos barracones, según publicaba la prensa local. El Correo informaba recientemente también de que precisamente con las clases prefabricadas en el colegio público Aldaialde, en el barrio de Zabalgana de Vitoria, los padres denunciaban que «no se puede volver (a las clases) con seguridad a un centro en barracones». El centro en cuestión está pendiente de unas obras que desemboquen en un edificio definitivo.

Por último, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes a nivel educativo del Gobierno central, tampoco se han anunciado nuevos barracones para afrontar este curso escolar marcado por la Covid-19.

Cada aula prefabricada cuesta unos 100.000 euros y su instalación es rápida

Ante tanto protagonismo de estas infraestructuras, cabe preguntarse ¿cómo son exactamente estos barracones? «Las aulas prefabricadas son estructuras construidas de forma previa antes de su instalación en la escuela o en el colegio donde se requiere más espacio, las cuales pueden ser diseñadas a medida y cumpliendo la necesidad de cada escuela pública o privada, permitiendo albergar cómodamente la cantidad necesaria de alumnos, para poder dividir el total de estudiantes en varios grupos respetando el distanciamiento social», describen desde la empresa especializada GSI Constructora, desde donde también especifican que pueden ser diseñadas con materiales como madera, hormigón, metal o cristal. «Una de las ventajas de este tipo de aulas, es la facilidad de instalación y desinstalación, ya que las mismas pueden ser construidas en módulos o bloques de construcción que permite un manejo rápido y sencillo de las piezas, reduciendo de forma extraordinaria el costo de la mano de obra y materiales», añaden desde esta empresa. Cada aula instalada supone para las arcas autonómicas un desembolso nada desdeñable de unos 100.000 euros, por lo que las autonomías están apostando por el régimen de alquiler a compra. Lo que está claro es que esta solución arquitectónica, fuertemente criticada en el escenario anterior a la pandemia, está en auge gracias al coronavirus.



Aulas prefabricadas por CC.AA. Elaboración propia a partir de datos oficiales

¿Congelará el Gobierno el salario de los docentes en 2021?

Tras haber acordado en enero subirlo un 2%, Celaá, Montero y Calviño ahora no lo descartan. Medio millón de profesores aguarda a conocer el borrador de los Presupuestos Generales del Estado

Daniel Martín

El Gobierno de Pedro Sánchez se plantea congelar en 2021 el sueldo al algo más de medio millón de docentes que conforman la educación pública no universitaria. No hay una confirmación oficial, aunque las declaraciones vertidas desde hace un par de semanas sobre este tema por parte de algunas de las máximas representantes del Ejecutivo de coalición inquietan a los profesionales de la educación y al resto del funcionariado. El Gobierno debe aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en un contexto de pandemia y crisis económica y sanitaria que ha trastocado los planes anteriores a la llegada del coronavirus. Es por ello que en vez de subir un 2% el sueldo a los funcionarios, como había aprobado el pasado 21 de enero en Consejo de Ministros y lo que costaría unos 2.000 millones de euros que se sumarían a los 32.000 que ya gasta el Estado en esta partida, lo más probable es que acabe congelando las retribuciones a los trabajadores del Estado para tratar de cuadrar unas cuentas que, a la fuerza, tendrán que estar centradas en solucionar la pandemia de la Covid-19 a la vez que se cumplen los compromisos con Europa.

El Gobierno de coalición tiene durante los próximos meses la tarea de afinar con las cuentas públicas y tratar de ir convenciendo al mayor número de fuerzas parlamentarias para aprobarlas en el Congreso de los Diputados posteriormente. Un tema que será uno de los más importantes del curso político y que urge después de tres años prorrogando los elaborados por el popular Cristóbal Montoro durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que, si bien han ido sirviendo para ir tirando hasta la fecha, ahora han quedado totalmente desfasados a tenor de los nuevos acontecimientos.

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha ido deslizado poco a poco la idea de que los salarios se quedarán como están, por ahora. Primero lo hizo hace unos días a través de una filtración a las páginas del diario El País, que apuntaban a esta congelación a la vez que introducían el mensaje de que no habría pérdida de poder adquisitivo.

Tras esta información, fueron preguntadas por los medios tres de los pesos pesados del Ejecutivo de Sánchez: la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la vicepresidenta Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. La primera le explicaba a Carlos Herrera en los micrófonos de la Cadena Cope ese mismo concepto al que aludía El País, de que si se congelaran los salarios de los funcionarios ello no afectaría a su poder adquisitivo, ya que la inflación del último año está siendo negativa y podría cerrar el curso en un 0%. «Han ganado poder adquisitivo», abundaba Calviño.

«Las medidas que hemos puesto en marcha están siendo positivas para proteger a empresas y trabajadores, pero tienen un alto coste desde el punto de vista fiscal. Funcionarios y pensionistas son colectivos importantes para que la economía se recupere. Ahora mismo estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores, pero el objetivo principal es impulsar el crecimiento económico y crear empleo», añadía la vicepresidenta tercera, sin dar nada por zanjado al respecto de este asunto.

Montero: «Tenemos que estudiar todas las posibilidades»

En 2018, aun con Rajoy en la Moncloa, el Ejecutivo central acordó con los sindicatos subidas salariales hasta 2020 que iban desde el 6,1% al 8,8%. Unos porcentajes que actualmente no ve claros ni el mayor de los optimistas. Y si los veía, las declaraciones de la ministra de Hacienda sobre este tema seguro que atenúan un poco la euforia.

Y es que, para Montero, la congelación de los sueldos de los funcionarios forma parte de una serie de posibilidades que «hay que estudiar». La ministra repetía en el Congreso, a preguntas de los periodistas también a raíz de la información del diario de Prisa, el argumento de que los funcionarios habían visto una mejora del poder adquisitivo durante los últimos cursos. «Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada», como consecuencia de una «caída de la recaudación», que será de un 5,3%, según los cálculos de Montero incluidos en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. La ministra también apuntó a que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el competente en cuanto al funcionariado respecta, aún no había tomado ninguna decisión en cuanto a esa hipotética congelación salarial. «Son muchas las necesidades; y los recursos, limitados», zanjó sobre este asunto, dejando la puerta abierta a no subir los sueldos de docentes y otros cuerpos del Estado.

TABLA DE LAS RETRIBUCIONES BRUTAS MENSUALES DE SECUNDARIA 2019							
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
COMUNIDAD AUTÓNOMA	SUELDO BASE	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C.COMUNIDAD	COMPLEMENTO RESIDENCIA		PRODUCTIVIDAD/ CONSOLIDACIÓN/ ACUERDOS/OTROS	TOTAL MES (con 0 trienios)
ANDALUCÍA	1.179,96 €	20,19 €	600,35 €		--	--	2.400,50 €
ARAGÓN	1.179,96 €	620,22 €	592,36 €		--	--	2.392,54 €
ASTURIAS	1.179,96 €	629,01 €	519,56 €		--	219,75 €	2.328,53 €
BALEARES	1.179,96 €	620,22 €	745,35 €	Mallorca	97,81 €	Mallorca	2.643,34 €
				Otras islas	108,29 €	Otras islas	2.653,82 €
CANARIAS	1.179,96 €	628,79 €	653,84 €	Isla capitalina	138,62 €	Isla capitalina	2.601,21 €
				No capitalina	461,78 €	No capitalina	2.924,37 €
CANTABRIA	1.179,96 €	652,80 €	744,33 €		--	--	2.577,09 €
CASTILLA LA MANCHA	1.179,96 €	620,18 €	771,51 €		--	--	2.571,65 €
CASTILLA Y LEÓN	1.179,96 €	620,19 €	598,64 €		--	23,00 €	2.421,79 €
CATALUÑA	1.179,96 €	620,22 €	613,11 €		--	--	2.413,29 €
CEUTA Y MELILLA	1.179,96 €	619,41 €	387,74 €		937,85 €	--	3.124,96 €
EUSKADI	1.179,96 €	748,56 €	947,59 €				2.876,11 €
EXTREMADURA	1.179,96 €	620,19 €	637,37 €		--	--	2.437,52 €
GALICIA	1.179,96 €	620,22 €	609,21 €		--	--	2.409,39 €
LA RIOJA	1.179,96 €	620,22 €	712,69 €		--	--	2.512,87 €
MADRID	1.179,96 €	620,19 €	594,60 €		--	--	2.394,75 €
MURCIA	1.179,96 €	620,22 €	686,52 €				2.486,70 €
NAVARRA	1.921,24 €	758,54 €			--	--	2.679,78 €
PAIS VALENCIANO	1.179,96 €	620,22 €	631,13 €		--	--	2.431,31 €

Fuente: UGT

Sin embargo, en paralelo, en una entrevista en Canal Sur Radio, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que el Gobierno no estaba dispuesto a que la crisis se fuera a resolver «a costa» de los que solo tengan su pensión, o su sueldo, como en el caso del cuerpo docente público. «Vamos a preservar en la medida de lo posible por supuesto las pensiones y los salarios. Es bueno para la economía, es bueno sostener el nivel de circulación de recursos y el consumo. La congelación del sueldo de los funcionarios no está en el registro del Gobierno», señalaba. En Antena 3, Calvo incidía en que el Ejecutivo no iba a congelar los salarios de los funcionarios y que, por ello, esta hipotética medida no estaba incluida en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que el Ejecutivo trabaja. En todo caso, esa propuesta será radicalmente distinta al objetivo previsto antes de que estallara la pandemia.

En una entrevista en El Independiente, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguraba, por su parte, que ella no era «partidaria de congelar ningún sueldo, pero tenemos que ver cuáles son las necesidades del sistema en este momento». Cuestionada por si descartaba la posibilidad de que los docentes de la educación pública no universitaria vieran congelados sus emolumentos, Celaá se desmarcaba, aunque reiteraba su incomodidad ante esta posibilidad: «Es que no estoy trabajando en ese ámbito. Lo que sí digo es que durante siete años la educación ha sufrido en España recortes importantes. La respuesta a la crisis económica fue recortar la educación, lo cual me parece un error de primera magnitud. Eso no lo haría Alemania. Se computa como gasto público lo que es inversión. Si hay que apretarse en gastos corrientes, se aprieta, pero no se puede recortar. A la educación española le faltan recursos y la que más ha sufrido ha sido la pública y también centros concertados, muchos concertados, que escolarizan alumnado vulnerable. Por tanto, hay que compensarlo y no dar más a quien más tiene».

El líder de Izquierda Unida, integrada en Unidas Podemos, y ministro de Consumo, Alberto Garzón, presionaba hace unas jornadas a su socio de Gobierno al advertirle de que «sería un error garrafal» congelar los salarios públicos. Más aun cuando ambos partidos han basado buena parte de sus mensajes políticos en presentarse como los antagonistas del «PP de los recortes», que tuvo que meter la tijera a las arcas del Estado, como ya venía haciendo el Gobierno de Zapatero, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una tesitura cuando menos incómoda para ambos partidos, que en el ámbito educativo también han tenido roces con motivo de la vuelta a las aulas que se está produciendo durante este mes de septiembre, al acusar desde la formación morada a la socialista Celaá de «falta de liderazgo». La ministra se defendía apuntando hacia las competencias autonómicas en materia educativa.

Baleares y Extremadura ya anuncian que no subirán los salarios

En función del poder ejecutivo que les confiere la ley a las comunidades autónomas en materia en cuanto a la enseñanza, así como la capacidad de legislar en cuanto a docentes y otros funcionarios, dos de ellas ya han anunciado la congelación salarial para sus empleados públicos, a la que se podrían ir sumando otras regiones aunque el Gobierno central no lo incluyera en los PGE. Las dos de la avanzadilla son, además, del PSOE: Islas Baleares y Extremadura.

La consejería balear de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ya anunció que no aplicará durante este año la subida del 2% acordada entre el Gobierno central y las fuerzas sindicales. Aunque lo justificó en que ese recorte iría destinado a reforzar las plantillas de Educación y de Sanidad. A su vez, la Junta de Extremadura apuntó a que tampoco podía asumir la subida del 2% porque tendrían que asumir gastos extraordinarios por la

crisis nacida con la pandemia. En el caso de Baleares, el salario de los maestros está en unos 2.350 euros, mientras que para los profesores de Secundaria la cifra está 300 euros por encima.

Por su parte, los docentes de FP cobran cerca de 2.500 euros brutos mensuales. Las nóminas de los docentes de Baleares no son, en todo caso, equiparables a las del resto de comunidades, puesto que a su mensualidad suman también el correspondiente complemento de residencia, dadas sus peculiaridades geográficas. En Extremadura, por su parte, las retribuciones a los docentes van de los 2.777 de la FP a los 2.161 de los maestros, pasando por los 2.437 de los profesores de instituto, según el boletín de Retribuciones docentes en la Enseñanza Pública 2019-2020 del sindicato UGT.

Los sueldos de los docentes distan hasta en 600 euros en la misma categoría dependiendo de la comunidad autónoma

Los sueldos de los docentes distan hasta en 600 euros en la misma categoría dependiendo de la comunidad autónoma como constatan los datos de la Unión General de Trabajadores, que matizan que esto se da solo si se tienen solo en cuenta las retribuciones básicas y las complementarias, sin entrar en asuntos insulares y similares. Los docentes mejor pagados son los profesionales de la enseñanza del País Vasco, seguidos de los de Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra. Del otro lado, los salarios más bajos corresponden a los docentes de Asturias, Aragón y Madrid. En concreto, en Primaria, los sueldos más elevados oscilan entre los 2.485,14 euros del País Vasco y los 2.231,58 de Navarra. En Secundaria, entre los 2.876,11 euros de los vascos y los 2.571,65 de los castellanomanchegos. En el lado de los que tienen retribuciones más bajas, los maestros asturianos cuenta con una nómina de 2.050,61 euros y los madrileños, cobran 2.118,51 euros. En Secundaria, el profesorado asturiano percibe 2.328,53 euros y el madrileño 2.394,75. Ante esta disparidad, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT viene reclamando desde hace tiempo la equiparación salarial del colectivo docente en toda España.

UGT apoyaría la medida siempre que se ligara al Índice de Precios al Consumo

Al saltar la polémica de la posible congelación de los salarios, el secretario de Administración General del Estado en UGT, Carlos Álvarez, señaló que el sindicato aceptaría una congelación salarial para los funcionarios en 2021, siempre que se asegurase el mantenimiento de su poder adquisitivo mediante una cláusula de revisión salarial ligada al IPC (índice de Precios al Consumo).

«Es necesario recordar que los empleados públicos perdimos 14 puntos de poder adquisitivo durante la crisis», añadió ante los medios, antes de zanjar que «lo que se está planteando ahora es la negociación de un acuerdo de Legislatura en el que, una vez asegurado el mantenimiento de poder adquisitivo, las subidas salariales vayan ligadas a la evolución de determinados parámetros económicos, como la inflación y el PIB».

CSIF apunta a que los funcionarios «no merecen una medida unilateral de este tipo»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apuntó en un comunicado que «los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda», en referencia a la información de El País. «Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato», aseguraron, antes de avanzar que iban a pedir una reunión al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, liderado por Carolina Darias, para iniciar una negociación en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El objetivo del sindicato es «abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos». CSIF recuerda que el funcionariado «ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación», entre otros. El sindicato dice entender «las dificultades que atraviesa la economía», pero recuerda en el texto que «los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010». «Reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario», zanján.

CCOO rechaza la congelación y pide «respeto institucional»

El sindicato CCOO, al igual que CSIF, también rechaza la posible congelación y pide «respeto institucional» y que se abra de forma «inmediata» la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público. El Área Pública de CCOO Reacciona con rechazo a la congelación y consideró que la «noticia filtrada por el Gobierno» buscaba «caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real».

«No es de recibo el modelo de negociación que se pretende reinstaurar, del que no compartimos ni las formas ni el fondo. CCOO no entiende un diálogo social que se hace a golpe de titular de prensa», incidió el sindicato en este tema. Comisiones Obreras también acusó de «escasa voluntad» de diálogo al equipo gubernamental Darias, al que consideró «más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y

asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadores públicos». «El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado», concluyeron.

